

D-35204
04.

1

CHARRY MOSQUERA ABOGADOS ASOCIADOS & Cía. S. A. S.

Juan Manuel Charry Urueña
Calle 72 No. 9-55, Oficina 803
Teléfonos (571) 3128500/900
Bogotá D. C. – Colombia
www.charrymosquera.com.co
jcharry@charrymosquera.com.co

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Reparto
E.S.D.



Referencia: Demanda inconstitucionalidad artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Demandante: Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO

JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA, abogado identificado con cédula de ciudadanía número 79.147.236 de Usaquén y Tarjeta Profesional número 33.683 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre propio y en representación de la FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES - FENALCO, conforme a poder debidamente otorgado que adjunto, en ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6° del artículo 40 de la Constitución Política y en el Decreto Extraordinario 2067 de 1991, presento ante la Honorable Corte Constitucional **DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD** contra los artículos 274 y 275 del “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, por las razones que paso a exponer:

Los citados artículos serían inconstitucionales, pues desbordarían la atribución legislativa del artículo 150, numeral 19, literal c), de la Constitución, que sólo permite al Congreso dictar normas generales, señalar objetivo y criterios, e invadiría las competencias del Gobierno de modificar aranceles del artículo 189, numeral 25 de la misma. Excepto, que se tratara de manera principal de una norma con objetivo fiscal o de recaudo de ingresos para el Estado, que sería de competencia del Congreso.

También viola la unidad de materia y los convenios internacionales en materia de comercio exterior, el Acuerdo General del GATT, el Acuerdo de la Ronda de Uruguay y el Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, relativos a la Organización Mundial del Comercio OMC.

I. NORMA DEMANDADA.

A continuación se transcribe la norma que se demanda:

La Ley 1955 de 2019, artículos 274 y 275, establece:

“ARTÍCULO 274°. Se establecerá un arancel de treinta y siete punto nueve por ciento (37.9%) a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto.”

"ARTÍCULO 275°. Se establecerá un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares USD, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional."

Se trata del establecimiento de aranceles a las importaciones de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional.

II. NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS.

Las normas constitucionales infringidas por el artículo demandado son las siguientes:

Artículo 136, numeral 1:

Los artículos demandados violan éste precepto constitucional toda vez que el Congreso se está inmiscuyendo en asuntos que son de competencia privativa del Gobierno al expedir normas que son única y exclusivamente de su iniciativa.

Artículo 150, numeral 19, literal c:

El Congreso debe dictar las normas generales, objetivos y criterios que debe tener en cuenta el Gobierno para modificar aranceles y tarifas de aduanas, por lo tanto no le compete al Congreso expedir normas sobre materias que competen únicamente a éste.

Artículo 154:

Este artículo establece que son de iniciativa privativa del gobierno las leyes de criterios generales relativas al crédito público, el comercio exterior y el régimen de cambio internacional, el régimen salarial de los empleados públicos y las leyes que decreten exenciones tributarias, pues es el Gobierno al que le corresponde evaluar la conveniencia y oportunidad del establecimiento y monto de los aranceles.

Artículo 158:

Este artículo establece que todos los proyectos de ley deben referirse a una misma materia, en efecto, los preceptos objeto de la presente demanda, fueron incorporados en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo sin examen del Gobierno Nacional, igualmente, en la parte general de la ley no se contempla medida alguna respecto de políticas arancelarias y menos reducidas a un solo sector y con tarifas precisas. El contenido de los artículos, NO tiene relación en absoluto con ninguno de los capítulos de bases del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 189, Numeral 25:

El Congreso de la República en materia de comercio exterior y aduanas, solamente, puede dictar normas generales y señalar objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, por lo tanto, no puede incrementar los aranceles, pues es competencia de éste último.

Artículo 339:

Este artículo establece que el Plan Nacional de Desarrollo está conformado por una parte general en la que se señalan entre otras cosas, los propósitos y objetivos nacionales, las

metas y un Plan de Inversiones de las entidades públicas del orden nacional que comprenderá los presupuestos plurianuales de programas de inversión nacional.

Artículo 341:

El Gobierno debe elaborar el Plan de Desarrollo con participación de las autoridades de planeación, entidades territoriales, Consejo Superior de la judicatura con previo concepto del Consejo Nacional de Planeación, posteriormente presentará el proyecto ante el Congreso (dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial).

Adicionalmente establece que por iniciativa del Congreso solo puede modificar el Plan de Inversiones, es decir que la parte general del Plan no puede ser modificada, enmendada o adicionada.

Artículo 342:

La ley orgánica reglamentará lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo, así como también determinará la organización del Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales.

III. ANTECEDENTES DE LA TECNICA DE LEY CUADRO PARA RÉGIMEN DE ADUANAS.

1.- Reforma constitucional de 1968.

a) En la Asamblea Constituyente de 1991, se resume claramente la técnica de ley cuadro o marco para el régimen de aduanas. Así se consignó en la Ponencia: "La función legislativa". Ponentes: Álvaro Echeverry Uruburu, Antonio Galán, Arturo Mejía Borda, Luis Guillermo Nieto Roa, Rosemberg Pabón Pabón, Alfonso Palacio Rudas, Hernando Yepes Arcila. (Gaceta Constitucional No. 51, páginas 2 y siguientes)

"II. La ley marco. Con base en los argumentos de orden técnico en la reforma constitucional de 1968 se operó una transferencia de soberanía de la rama legislativa al órgano Ejecutivo en materia de crédito público, deuda nacional y su servicio, cambio internacional y comercio exterior, los aranceles, las tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Esa redistribución de materias se concretó en el artículo 76, numeral 22 de la Constitución vigente. La fórmula jurídica que se diseñó para hacer operativa la nueva categoría, se fundó en la técnica de la "ley cuadro" o "ley marco". (Subrayo)

Con la reforma constitucional de 1968 se realizó una transferencia de soberanía de la rama legislativa al órgano Ejecutivo en materia de crédito público, deuda nacional, cambio internacional y comercio exterior, aranceles y demás disposiciones referente al régimen de aduanas, fundamentada en la técnica de las leyes marco.

"(...)

Además, para constreñir al Congreso a moverse dentro de límites más estrechos, en materia legislativa los proponentes de la reforma ubicaron, en el centro del debate, la cuestión de saber si la rama legislativa tenía la aptitud necesaria, la preparación suficiente y la capacidad técnica requeridas para hacer frente al cúmulo de necesidades y responsabilidades que brotan de una sociedad en evolución y de un Estado planificador en materias de suyo especializadas que demanda, en uno y otro

caso, soluciones rápidas, adecuadas y técnicas, so pena de que la sociedad se estanque, anquilose y desactualice.

A raíz de ese proceso y, al tenor del artículo 79 de nuestra Carta, las cámaras después de que votan una ley marco son reemplazadas por el gobierno. A partir de ese instante las facultades de iniciativa y de decisión respecto de las materias enumeradas en el artículo 76, numeral 22, quedan en manos del gobierno que, por esa vía, se convierte en el órgano competente, investido de facultades legislativas para expedir, modificar y derogar la legislación dentro del marco normativo que le trazó el Congreso y que se complementa a través del reglamento. Se supone que las cámaras vuelven a quedar habilitadas, en el ejercicio de esa potestad legislativa, cuando al gobierno le interesa una nueva norma cuadro para moverse dentro de límites mucho más amplios de los que inicialmente le fueron atribuidos. (Subrayo)

Una vez las cámaras votan una ley marco son reemplazadas por el Gobierno, momento a partir del cual, las facultades de iniciativas y decisión respecto de las materias ya mencionadas, quedan en manos del Gobierno investido de facultades legislativas para expedir, modificar y derogar la legislación dentro de los lineamientos trazados por el Congreso.

“(…)

Por ejemplo, respecto al tema de los aranceles y las tarifas cabría hilvanar reflexiones de diversa naturaleza. A la luz de la técnica fiscal se trata de contribuciones que exclusivamente compete establecer a los órganos de representación ciudadana. Hunden sus raíces en el principio universalmente reconocido y acatado de que no hay impuesto sin representación. Ese principio sembró los pilares de la Cámara de los Comunes que es considerada, en el mundo de las instituciones políticas como la “madre de los parlamentos.” (...)

Y en el caso extremo de que al amparo de una ley marco se adopten por reglamento decisiones que indirectamente impliquen algún tipo de obligación para los particulares, o que contengan cláusulas comerciales que toquen con aspectos a los cuales se refiere el artículo 76 numeral 18, la intromisión de una rama en otra tiene repercusiones más complejas. Es evidente que, en tales eventos las facultades asignadas al ejecutivo, mediante normas cuadro, estarían lejos de ceñirse tanto al mandato constitucional como a los principios generales que autorizan al gobierno a regular los detalles y los aspectos relativos a su aplicación dentro de esos parámetros. Las materias que he mencionado involucran cuestiones de fondo y fundamentales, pues afectan los intereses de la Nación en su conjunto.

Los tratadistas coinciden en afirmar que la determinación de los principios fundamentales por el Parlamento significa dictar las normas generales a partir de las cuales el Ejecutivo puede legislar. Cuando la rama legislativa define principios generales estructura un marco. Entonces, el Jefe de Gobierno queda investido de facultades para crear situaciones jurídicas dentro de las pautas que previamente le han trazado.” (Subrayo)

La determinación de los principios fundamentales por parte del Congreso, significa que debe dictar normas generales a partir de las cuales el Ejecutivo puede legislar.

b) La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en sentencia número 54 del 15 de julio de 1982 del Magistrado Ponente Doctor Luis Carlos Sáchica, respecto de las leyes cuadro señaló:

“Son leyes cuadro las relativas a normas orgánicas del presupuesto nacional, planes y programas de desarrollo económico y social, organización del crédito público y del gasto público, cambio internacional y comercio exterior, régimen arancelario y aduanero y determinación de la estructura de la administración, de las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y régimen de prestaciones sociales. (Subrayo)”

Respecto de todas ellas se predica la característica de que el poder de impulsión o de iniciativa para presentar proyectos de ley es exclusivamente gubernamental, conforme al inciso 2º del artículo 79 de la Constitución, quedando por tanto el congreso excluido de la facultad de presentar esa clase de proyectos.

Se entiende, además, que con ellas se debe, por lo menos, pero no exclusivamente, señalar las orientaciones generales, fijar los esquemas y derroteros esenciales y señalar los límites, para el ejercicio de la facultad de desarrollo y aplicación reglamentaria del Ejecutivo (y aun del propio Congreso, cuando se trata de la ley anual de apropiaciones en relación con la ley orgánica del presupuesto). Dichas leyes entraban las relaciones entre Ejecutivo y Congreso en forma tal que el uno no puede expedirlas ni modificarlas sin la colaboración del otro”.

Los temas relativos al presupuesto nacional, planes de desarrollo económico, organización del crédito público, cambio internacional y comercio exterior, régimen arancelario y aduanero, entre otros, se reglamentarán mediante las leyes marco o generales.

Respecto de estos temas, la iniciativa de presentar proyectos de ley es exclusivamente del gobierno quedando excluido el Congreso de la facultad de presentar esa clase de proyectos.

2.- Régimen Constitucional de 1991.

a) El Constituyente de 1991 tuvo en cuenta la técnica de las leyes marco que se adoptó en el régimen constitucional anterior con la reforma de 1968, en el sentido de que había una transferencia de soberanía de la rama Legislativa a la Ejecutiva, en materia de aranceles y comercio exterior, entre otras, que constreñía al Congreso a moverse entre límites más estrechos, de manera que dictada la ley marco el gobierno quedaba investido de facultades legislativas, que aquel solo recuperaría si el Gobierno estuviera interesado en otra ley marco.

El mismo Constituyente dejó planteada controversias más complejas, como es el caso de los aranceles, que implicarían una carga fiscal y que deberían obedecer al principio de que no hay impuesto sin representación.

Así quedó consignado en el Artículo 150-19, que en su parte pertinente, dice:

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...)

b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República;

c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas;

(...).”

En relación con las funciones del Presidente de la República, el Artículo 189, en su parte pertinente, establece:

Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

25. (...) modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; ...”

Es claro que al Congreso de la República, solamente, le corresponde dictar normas generales, señalar objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional, lo cual se conoce como la técnica de las leyes marco, mientras que al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa le corresponde regular de manera específica lo concerniente al régimen de aduanas.

b) Régimen Legal.

La Ley 1609 de 2013 (Ley Marco de Aduanas), en sus artículos 1 y 2, establece:

“Artículo 1. Sujeción A La Ley. El Gobierno Nacional, al modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, no podrá exceder los términos establecidos en la presente ley, sin entrar a regular aspectos o materias que correspondan privativamente al Congreso de la República, ni este hacer desarrollos normativos que son propios del Ejecutivo.

De la misma forma el Congreso de la República al ejercer la facultad legislativa en estos aspectos, deberá tener en cuenta la responsabilidad social en procura de mantener la estabilidad jurídica nacional, sin asumir competencias, que frente a estas materias, correspondan al Gobierno Nacional”.

El Gobierno Nacional no puede sobrepasar las facultades establecidas en ésta ley, tampoco puede regular materias que son privativas del Congreso, de igual manera, el Congreso no puede expedir normas sobre asuntos que son de iniciativa propia del Ejecutivo.

“Artículo 2. Regulación. Los decretos que dicte el Gobierno para desarrollar esta ley marco serán reglamentados a través de Resoluciones de Carácter General, proferidas por la autoridad competente.

Lo establecido en el presente artículo, no impide la Promulgación de Actos Administrativos proferidos en virtud del Principio de Coordinación y Cooperación de las entidades del Estado, expedidos en procura del debido desarrollo y aplicación de los aspectos reglamentados de que trata el inciso primero.

Parágrafo 1o. Los Actos Administrativos de distinta naturaleza, tales como circulares o conceptos no podrán ser contrarios a la Constitución Política, a la Ley ni al reglamento, y su naturaleza será de criterios auxiliares de interpretación (...)"

Para el desarrollo de esta ley marco, las autoridades competentes expiden las Resoluciones de Carácter General que desarrollan los decretos que dicta el Gobierno, sin embargo ello no impide que las entidades del Estado expidan Actos Administrativos con los que se desarrolla la ley.

Ningún Acto Administrativo podrá ser contrario a la Constitución, a la Ley, ni a los Reglamentos.

Como se puede observar, ésta ley precisó la facultad reglamentaria atribuida constitucionalmente al Congreso respecto de asuntos de aduanas, dejando en cabeza del Presidente la facultad de modificar los aranceles con sujeción a ésta ley marco.

Desarrollo Jurisprudencial sobre leyes marco y aranceles.

i) La Corte Constitucional, en sentencia C-510 de 1992, Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró inconstitucional el Decreto 2183 de 1991, consideró:

*"La naturaleza excepcional de las leyes marco - según la regla general en las materias de competencia del Congreso la extensión o densidad normativas, son asuntos librados a su soberana discreción -, unidos a una atenta consideración del nuevo texto del artículo 150-19-c, explicados a la luz de los debates y ponencias que condicionaron la competencia del Gobierno a la **existencia de razones de política comercial**, obligan definitivamente a excluir la posibilidad de que a través de los decretos que desarrollen la ley marco respectiva se puedan alcanzar finalidades de orden fiscal reivindicadas en favor del Congreso en virtud de la mencionada restricción. Si a través del arancel de aduanas, ya se trate de su establecimiento o modificación, se busca de manera primera y principal un objetivo fiscal o de recaudo de ingresos para el Estado, ello sólo se podrá hacer por ley y en ejercicio de la competencia tributaria del Congreso (CP artículo 150-12)."*

La Corte distinguió entre los aranceles definidos por el Gobierno en virtud de la ley marco y la existencia de razones de política comercial, de los aranceles que de manera principal tienen un objetivo fiscal o de recaudo de ingresos para el Estado, los cuales sólo podrían fijarse por ley, en ejercicio de la competencia tributaria del Congreso.

ii) La Corte Constitucional en sentencia C-353 de 1997, Magistrado Ponente Doctor Jorge Arango Mejía, que declaró exequibles las disposiciones de la Ley 218 de 1995, excepto el parágrafo del artículo 1º, consideró:

*"El Presidente y el Congreso de la República, en materia arancelaria, tienen facultades complementarias. El Presidente de la República es el llamado a modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas (artículo 189, numeral 25), pero con sujeción a la ley marco que dicte el Congreso de la República (artículo 150, numeral 19, literal c.), en la que, por razones de **política comercial**, se determina la fijación de aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas."*

Más adelante, al referirse a las competencias del Congreso para modificar decretos dictados con fundamento en Estado de Emergencia Económica, dijo:

"La circunstancia anterior permite sostener que el Congreso sí puede modificar las normas dictadas por el Presidente en ejercicio de los poderes excepcionales, como se ha explicado. No hay razón al sostener que esta materia (la relativa a los aranceles) escapa a la competencia del Congreso en ejercicio de las facultades que le confiere el inciso sexto del artículo 215 de la Constitución."

En consecuencia, el Presidente tiene la facultad de modificar los aranceles con sujeción a la ley marco y por razones de política comercial. Pero, en el caso del Estado de Emergencia Económica, el Congreso puede modificar las normas dictadas por el Presidente. Aunque en mi concepto, se trata de una conclusión equivocada, pues el Presidente no podría modificar los criterios generales mediante facultades de excepción, mientras que puede modificar los aranceles por atribución propia.

iii) La Corte Constitucional en sentencia C-798 de 2004, Magistrado Ponente Doctor Manuel José Cepeda Espinosa, que declaró exequible algunas expresiones del parágrafo 3º del artículo 14 de la Ley 7 de 1991, consideró:

"De los párrafos citados se puede concluir que la Constitución, al limitar los objetivos por los cuales el Gobierno puede modificar las tarifas arancelarias a aquellos de política comercial (i) prohíbe que estas medidas, al no ser adoptadas por el Congreso, estén determinadas por "finalidades impositivas", tengan un "carácter fiscal", es decir, que se utilicen como "fuente de exacción fiscal" y persigan de manera "primera, principal [o] preponderante" objetivos de orden fiscal, en especial el "recaudo de ingresos para el Estado"; y en sentido contrario, (ii) permite que dichas medidas consulten diversos objetivos de carácter económico relacionados de alguna manera directa o indirecta con el comercio exterior tales como "favorecer la producción nacional [,] promover la estabilidad económica [a través del] aumento o disminución de los aranceles, la contracción o ampliación de las importaciones [que] pueden afectar el nivel general de precios y los movimientos de la oferta y la demanda", estimular el crecimiento económico, proteger la industria nacional, promover la inversión, controlar los precios domésticos, defender a los consumidores e incentivar la competitividad de los productos nacionales."

Más adelante, precisa:

"Surge entonces la cuestión acerca de cuándo es el Gobierno, y cuándo el Congreso, quien decide variar la tarifa del arancel. Como se ha señalado, en esta sentencia dicho problema también fue solucionado por la Corte. En la sentencia C-510 de 1992 esta Corporación dispuso que son competencia exclusiva del Congreso aquellos asuntos que ingresen "en la órbita de lo político", persigan "finalidades impositivas", tengan un "carácter fiscal", es decir que se utilice como "fuente de exacción fiscal" y busquen de manera "primera, principal [o] preponderante", objetivos de estirpe fiscal o el "recaudo de ingresos para el Estado."

La Corte mantiene la diferencia entre los aranceles fijados por el Gobierno y aquellos determinados por el Congreso, en los términos de la sentencia C-510 de 1992.

iv) La Corte Constitucional, en sentencia C-172 de 2009, Magistrada Ponente Doctora Cristina Pardo Schlesinger, sobre leyes marco, dijo:

"La Corte Constitucional ha dicho que una ley marco busca permitirle al Estado "responder ágilmente a los cambios acelerados que experimentan en la sociedad moderna diversas materias. Para poder reaccionar prontamente ante los sucesos cambiantes es necesario contar con la información necesaria - suficiente y actualizada - y con procedimientos expeditos. Estos dos requisitos son satisfechos por el Poder Ejecutivo, pero no por el Legislativo. Este último suele contar con procesos de decisión lentos y no posee los recursos indispensables para disponer directamente de la información pertinente para la toma de decisiones, razón por la cual debe solicitarla del Ejecutivo. Esta situación es la que ha conducido a señalar que diversos asuntos deben ser regulados por el Ejecutivo de acuerdo con las orientaciones generales que imparta el Legislativo. De esta manera, la institución de las leyes marco permite simultáneamente resguardar el principio democrático - puesto que el Congreso conserva la facultad de dictar y modificar las normas básicas para la regulación de una materia - y reaccionar rápidamente ante la dinámica de los hechos a través de decretos del Gobierno que adapten la regulación específica de la materia a las nuevas situaciones."

La técnica de las leyes marco, entre otras, se fundamenta en la necesidad de dar respuestas institucionales oportunas a situaciones que cambian aceleradamente, para lo cual el Ejecutivo resulta más que idóneo, mientras que el Legislativo toma decisiones lentamente y no posee los recursos indispensables. En consecuencia, diversos asuntos, como sería el régimen de aduanas y el comercio exterior, deben ser regulados por el Ejecutivo de acuerdo con las orientaciones generales del Legislativo.

En otros términos el Congreso tiene un ámbito más estrecho de regulación legislativa, limitado a normas generales, objetivos y criterios, mientras que el Gobierno tiene un espacio mucho más amplio de regulación de la materia.

IV. DE LOS VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO.

A. Violación al Régimen de Reparto de Competencias - Iniciativa Legislativa en Materia Tributaria, Aduanera y de Comercio Exterior.

1.- La Constitución Política, artículo 154, en lo pertinente establece:

"No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales".

Es iniciativa legislativa exclusiva del Gobierno, las que ordenen la creación de entidades u organismos de la Administración Pública, las participaciones en las rentas nacionales, las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, además de las consagradas en los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150.

2.- La Constitución Política, artículo 150 numeral 19, señala:

" (...) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

- a) *Organizar el crédito público;*
- b) *Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República;*
- c) *Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas;" (...)*

Le corresponde al Gobierno Nacional, según el Artículo 189 numeral 25, dictar normas sobre crédito público, comercio exterior, régimen de cambio internacional, modificar aranceles y tarifas, entre otras, conforme con los criterios generales dictados por el Legislador.

Ahora bien, el Congreso de la República en materia de comercio exterior y aduanas, solamente, puede dictar normas generales y señalar objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, por lo tanto, no puede modificar los aranceles.

3.- La Corte Constitucional, en sentencia C-1707 de 2000, Magistrada Ponente Doctora Cristina Pardo Schlesinger, respecto de la iniciativa legislativa del gobierno, indicó:

"En estos términos, como quiera que no se cumplieron las exigencias procedimentales señaladas en el artículo 154 Superior, las cuales le reconocen al Gobierno Nacional iniciativa legislativa privativa en aquellas materias de ley que pretendan establecer exenciones tributarias, la Corte encuentra fundadas las objeciones que a este respecto formuló el Presidente de la República. En relación con esto último, es cierto que el Congreso, por expreso mandato constitucional, es la autoridad competente para imponer los tributos del orden nacional y, además, cuando las circunstancias de orden económico y social lo justifiquen, también es el órgano facultado para decretar las respectivas exenciones (C.P. arts. 150-12 154 y 338). Sin embargo, debe tenerse presente que -también por orden Superior- el ejercicio de esta última atribución sólo es legítima, en la medida en que las leyes que reconozcan exenciones sean promovidas por el Ejecutivo o coadyuvadas por éste (C.P. art. 154-2°)".

Los requisitos procedimentales establecidos en el artículo 154 de la Constitución reconocen al Gobierno Nacional la iniciativa legislativa privativa en aquellas materias que pretendan establecer exenciones tributarias, es decir, la ley que pretenda regular o modificar el tema de exenciones debe ser promovida por el Ejecutivo o coadyuvadas por este.

4.- La Corte Constitucional, en sentencia C-439 de 2016, Magistrado Ponente Doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, respecto de los límites a la competencia del Congreso, consideró:

"(...) Esta Corporación ha destacado que los límites a la competencia del Congreso para producir el derecho, interpretarlo, reformarlo y derogarlo, se derivan, fundamentalmente, (i) de la decisión constitucional de asignarle a otra rama del Poder Público u órgano independiente la regulación de un asunto determinado (C.P. art. 121); (ii) de las cláusulas contenidas en la propia Carta Política que imponen barreras a la libertad de configuración normativa del legislador sobre determinados temas (C.P. art. 136); y (iii) de la obligación también derivada del Ordenamiento Superior, de respetar, en el contexto de la regulación legislativa de una determinada materia, las normas constitucionales y los derechos y principios

establecidos directamente en la Carta. En armonía con ello, también la jurisprudencia ha señalado que la atribución legislativa del Congreso (iv) debe ajustarse al trámite fijado por la Constitución para la expedición de las leyes (C.P. arts. 157 y sigs.) y (v) observar igualmente las materias que deben ser desarrolladas por cada tipo y categoría de ley (C.P. arts. 150 y sigs.)”

Las competencias del Congreso están limitadas por: i) la asignación que hace la Constitución a otras ramas del poder público la regulación de un asunto determinado, ii) la obligación de respetar las normas, derechos y principios constitucionales en el contexto de la regulación legislativa de una determinada materia, entre otros.

B. Violación del artículo 136 numeral 1º de la Constitución Política.

1.- La Constitución Política, artículo 136 numeral 1º, establece:

“ Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras:

1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades”.

El Congreso no puede inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.

La Corte Constitucional, en sentencia C-332 de 2017, Magistrado Ponente Doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, consideró:

De lo anterior se deriva una importante consecuencia y es que se vincula el ejercicio de la iniciativa legislativa con un régimen de competencias previamente definido por la propia Constitución, por virtud de la cual la activación del procedimiento legislativo depende de la presentación de un proyecto de ley por parte de las autoridades legitimadas para tal efecto, como ocurre con el Gobierno Nacional. Precisamente, el inciso 1º del citado artículo 154 de la Carta dispone que: “No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. (...)”

Esta iniciativa privativa denota el papel significativo que la Constitución le otorgó al Gobierno Nacional en el desarrollo del proceso legislativo, pues la distribución de la titularidad en la competencia para dar inicio al trámite dirigido a la aprobación de una ley, reservando ciertas materias al ejecutivo, implica mitigar el carácter formal que tiene dicho acto, para vincularlo con una condición primordialmente sustantiva, en la que se entiende que esa prerrogativa opera como una forma de repartición del poder público, asegurando que los temas en los que el Gobierno es el único titular, cualquier intento de llegar a expedir una regulación sobre la materia, se sujeta a su “conocimiento y consentimiento” [102], en atención a su rol de promotor del iter legislativo.

Por esta razón, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 5ª de 1992, la Corte ha señalado que si bien la iniciativa privativa se expresa, por lo general, en el acto de presentación del proyecto de ley; excepcionalmente se admite que dicha

En Carrera de Bogotá D.C.
COD. 4112
LOMBANA
En Carrera de Bogotá D.C.

En Carrera de Bogotá D.C.
72

En Carrera de Bogotá D.C.
04
TÉLL
En Carrera de Bogotá D.C.

competencia, cuyo principal efecto es impedir que se legisle sobre las materias de su exclusiva iniciativa, sin su conocimiento y consentimiento, también se lleve a cabo mediante la figura de la coadyuvancia a cualquier proyecto de ley que curse en el Congreso y que se refiera a esos temas, aun cuando no hayan sido presentados por el ejecutivo[103]. Precisamente, el parágrafo del artículo 142 de la citada Ley 5ª de 1992 consagra que: "El Gobierno Nacional podrá coadyuvar cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el Congreso cuando la circunstancia lo justifique. La coadyuvancia podrá efectuarse antes de la aprobación en las plenarias". (Subrayo)

La iniciativa legislativa del Gobierno es una prerrogativa que opera como una forma de repartición del poder, cuyo principal efecto es impedir que se legisle sobre materias de su exclusiva iniciativa, sin su conocimiento y consentimiento.

3.- Por lo anterior, establecer un incremento de los aranceles a las confecciones infringe la prohibición prevista en el numeral 1º del artículo 136 de la Constitución, según la cual el Congreso debe abstenerse de "inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades", además desborda la atribución legislativa del artículo 150, numeral 19, literal c) de la Constitución Política que sólo permite al Congreso de la República dictar normas generales, señalar objetivos y criterios, e invadiría las competencias del artículo 189, numeral 25 de la misma, en cuanto a la facultad del Gobierno Nacional de modificar aranceles.

Violación al Principio de Unidad de la Materia.

La Constitución Política, artículo 158 establece:

"Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas."

Los proyectos de ley deben referirse a una misma materia, por lo tanto, las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella serán inadmisibles.

2.- La Corte Constitucional, en sentencia C-305 de 2004, ya citada, respecto del alcance y fundamento del principio de unidad de materia en el Plan Nacional de Desarrollo, consideró:

"El principio de identidad temática o unidad de materia en el trámite del proyecto de Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social reviste connotaciones particulares, que se derivan de la naturaleza especial de la Ley del Plan y de la función de planeación en sí misma considerada. En efecto, aunque la iniciativa para la presentación del respectivo proyecto es gubernamental, por diseño constitucional la función de planeación involucra no solamente al Congreso de la República, sino también a diversas instancias administrativas nacionales y territoriales y a la Rama Judicial."

"5.4. Como regla general, la Corte ha señalado que la relación de unidad temática entre el plan de desarrollo como un todo y una disposición específica, se desprende de la conexidad lógica que puede existir entre los postulados de la parte general

del plan con las normas que desarrollan esos postulados procurando llevarlos a la realidad. En ese sentido, esta Corporación ha señalado que las "disposiciones de carácter instrumental que no sean inequívocamente efectivas para la realización de los programas y proyectos contenidos en la parte general del plan, o que de manera autónoma no establezcan condiciones suficientes para la materialización de las metas y objetivos trazados en el plan, vulneran el principio de unidad de materia."

"En consonancia con lo anterior, la Corte ha dicho que "las disposiciones contenidas en la Ley del Plan que tengan un carácter simplemente normativo, no presupuestal, no son por esa sola razón inconstitucionales; empero, en virtud de los principios de coherencia y de unidad de materia, deben estar en una relación de conexidad teleológica directa e inmediata con la Parte General y programática de la Ley del Plan. Por lo tanto, dicha Ley no puede contener cualquier norma jurídica, ni su expedición es el momento de ejercer la potestad legislativa general reconocida al Congreso de la República, sin ninguna relación con los objetivos y metas de la función de planificación".]

Las disposiciones contenidas en la Ley del Plan deben estar en relación de conexidad teleológica directa e inmediata con la parte general y programática.

3.- La Corte Constitucional, en sentencia C-016 de 2016, Magistrado Ponente Doctor Alejandro Linares Cantillo, fijó los criterios jurisprudenciales a partir de los cuales se evalúa si una medida contenida en el Plan Nacional de Desarrollo desconoce el principio de unidad de materia.

"a) El principio de unidad de materia en la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo impone la conexión o vínculo entre los objetivos o metas contenidos en la parte general del Plan y los instrumentos creados por el legislador para alcanzarlos. (...)

"b) El principio de unidad de materia impone que exista una conexión teleológica estrecha entre los objetivos, metas y estrategias generales del Plan, y las disposiciones instrumentales que contiene. (...)

"c) La conexión estrecha que exige el principio de unidad de materia entre los metas y propósitos del plan y las disposiciones instrumentales contenidas en la ley, así como el correlativo incremento de la severidad del juicio de constitucionalidad a cargo de esta Corte, se apoya en varias razones.

"En primer lugar, seguir los estándares de juzgamiento previstos para otro tipo de leyes privaría -por el carácter multitemático de la Ley del Plan- de todo efecto útil al artículo 158, quedando las disposiciones de ese tipo de ley inmunes a los mandatos que contiene y a las finalidades que persigue.[35] Adicionalmente, teniendo en cuenta que el carácter dúctil que usualmente caracteriza este juicio se explica por la importancia de proteger el principio democrático que se concreta en la libertad de configuración del Congreso de la República, incrementar la intensidad del control cuando se trata de la ley del Plan se justifica debido a que dicho principio "se encuentra notoriamente mermado"[36] en tanto (i) la iniciativa es gubernamental, (ii) las posibilidades de modificación del proyecto por parte del Congreso se encuentran limitadas y (iii) el término para la aprobación del Plan es reducido.

“A tales razones, considera la Corte, las acompaña una adicional. En efecto, la especial posición que en el sistema de fuentes tiene la ley del Plan así como su particular eficacia normativa, exige asegurar que los mandatos en ella contenidos se relacionen directamente con la función de planeación. Se trata de una ley que no solo se erige en criterio para determinar la validez de otras leyes, sino que también tiene la aptitud de aplicarse inmediatamente puesto que sus mandatos constituyen mecanismos idóneos para su ejecución. Esa aplicación prevalente e inmediata debe encontrarse subordinada a que, en realidad, las normas instrumentales persigan de manera inequívoca los propósitos del Plan. (...)”

“d) La fijación del contenido del principio de unidad de materia en los anteriores términos se traduce en un control judicial más estricto encaminado a establecer, no cualquier tipo de conexión entre la parte general del Plan con las disposiciones instrumentales que lo componen, sino un vínculo directo y no simplemente eventual o mediato. El estándar de juzgamiento se hace más riguroso y demanda de la Corte un especial cuidado a efectos de evitar que, al amparo de la naturaleza temáticamente abierta de la ley del Plan, terminen incorporándose disposiciones extrañas a los propósitos de la planeación. (...)”

La cita jurisprudencial precisa la forma en que debe darse cumplimiento al principio de unidad de materia en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y en síntesis puntualiza:

- a) Los artículos del Plan Nacional de Desarrollo deben responder a los ejes temáticos establecidos por el Gobierno Nacional en las bases, lo que la Corte denomina como “parte general”.

b) Está claro que esta Ley cubre diversos asuntos y materias. Empero, tal amplitud temática no le faculta ni al Congreso ni al Gobierno incluir artículos que no hayan sido debidamente considerados en los fundamentos del Plan.

c) Los artículos del Plan Nacional de Desarrollo deben ser de carácter instrumental. Por tanto, aquellos que no sean inequívocamente efectivos para la realización de programas y proyectos contenidos en la parte general del plan -bases-, o que de manera autónoma no establezcan condiciones suficientes para la materialización de las metas y objetivos trazados en el plan, vulneran el principio de unidad de materia.

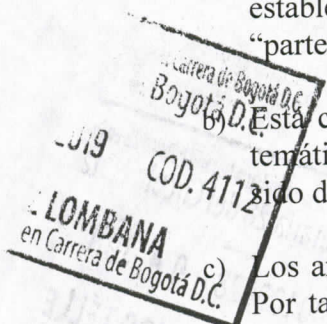
- d) Por tanto, dicha Ley no puede contener cualquier norma jurídica, ni tampoco es posible ejercer la potestad legislativa general reconocida al Congreso de la República, sin ninguna relación con los objetivos y metas de la función de planificación.

- e) El principio de unidad de materia impone que exista una conexión estrecha entre los objetivos, metas y estrategias generales del Plan, y las disposiciones instrumentales que contiene.

- f) El control constitucional sobre el contenido del Plan debe ser estricto.

- g) La aplicación de las normas del Plan debe estar subordinada a que persigan de manera inequívoca sus propósitos.

4.- Por todo lo anterior, los artículos 274 y 275, objeto de la presente demanda de inconstitucionalidad, incorporados en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo por



miembros de la Cámara de Representantes sin examen del Gobierno Nacional, no guardan relación alguna con la parte general.

Precisamente en ese acápite no se contempla medida alguna respecto de políticas arancelarias y menos reducidas a un solo sector y con tarifas precisas. Normas de esta naturaleza imponen la realización de sendos estudios económicos que demuestren que no generan afectación a la población en general y que examinen si es el Congreso de la República el competente para adoptarlas. Ni uno ni otro asunto ha sido revisado.

El contenido de los artículos, NO tienen relación en absoluto con ninguno de los capítulos de bases del Plan Nacional de Desarrollo.

En este orden, los artículos resultan contrarios al ordenamiento jurídico superior. No guardan relación alguna con los fundamentos y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.

Además, en los términos expuestos, no es competencia del Congreso de la República modificar la tarifa arancelaria cuando se trata de instrumentos de política comercial, pues esta labor le corresponde, salvo excepciones que no aplican en este caso, al Gobierno Nacional.

V. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, FACULTADES Y COMPETENCIAS.

1.- La Constitución Política, artículos 339, 341 y 342, establece:

“Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”.

El Plan Nacional de Desarrollo está conformado por una parte general en la que se señalan los propósitos y objetivos nacionales, las metas y prioridades de acción estatal así como las estrategias generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno, y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional que comprenderá los presupuestos plurianuales de programas de inversión nacional.

“Artículo 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el

proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo.

Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente(...).”

El Gobierno elaborará el Plan de Desarrollo con participación de las autoridades de planeación, entidades territoriales, Consejo Superior de la judicatura con previo concepto del Consejo Nacional de Planeación, se presentará el proyecto ante el Congreso dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial.

“Artículo 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”.

La respectiva ley orgánica reglamentará lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo, así como también determinará la organización del Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales.

2.- La Corte Constitucional, en sentencia C-524 de 2003, Magistrado Ponente Doctor Jaime Córdoba Triviño, al analizar el contenido de los artículos 339, 341 y 342 de la Constitución Nacional, así como el procedimiento para la elaboración y aprobación establecido en los artículos 13 y siguientes de la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, señaló:

2.2. Así mismo, la Carta Política se refiere a la naturaleza jurídica de la ley por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley ordinaria, de trámite especial y diferente de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo[9]. Las especificidades constitucionales en relación con la elaboración y trámite de la Ley del Plan de Desarrollo se refieren a lo siguiente:

a) La iniciativa para la elaboración del Plan corresponde al Gobierno Nacional, “por cuanto éste dispone de todos los elementos de juicio y de los instrumentos para elaborar los planes y programas respectivos”[10]. En esta fase del Plan, el Gobierno deberá atender los siguientes requisitos específicos: (i) elaborar el Plan con participación activa de las autoridades de planeación de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura; (ii) someter el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; (iii) una vez oída la opinión del Consejo, efectuar las enmiendas que considere pertinentes, y (iv) presentar el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del respectivo período presidencial.

Como se aprecia, la etapa de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo o, si se quiere, de preparación del proyecto de Ley del Plan, está conformada por varias

exigencias que deben ser atendidas por el Gobierno Nacional antes de presentarlo a consideración del Congreso de la República. En este aspecto la Corte Constitucional ha considerado que los requisitos previstos en la fase previa tiene carácter vinculante y son de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo. Sobre el particular expresó que “ese trámite previo, fijado directamente por la Constitución, aunque no hace parte del que se surte en el seno mismo de las cámaras legislativas, es requisito indispensable, de obligatoria observancia, para la validez de la ley mediante la cual se adopte el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual los vicios que surjan en esa etapa repercuten necesariamente en la inconstitucionalidad de la ley que se apruebe sobre la base del proyecto irregularmente preparado” [11].

b) Por su parte, en la fase de aprobación del proyecto de Ley del Plan por parte del Congreso de la República se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: (i) con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada Cámara discutirá y evaluará el Plan en sesión plenaria; (ii) el Congreso podrá modificar el proyecto de ley. En primer lugar, los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el Gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia y, en segundo lugar, la modificación del Plan de Inversiones Públicas procede siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero y cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o cualquier inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional; y (iii) si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley.

Se consagran entonces ciertas restricciones para la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Congreso de la República, las cuales aluden tanto a la fijación de un término preciso para discutir y aprobar el proyecto de ley, como a la exigencia de obtener el visto bueno del Gobierno Nacional para incrementar las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o incluir proyectos de inversión no contemplados en él.”

La ley por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo debe cumplir con las siguientes especificidades: i) La iniciativa para su elaboración corresponde al Gobierno Nacional que además, deberá tener participación activa de las autoridades de planeación, someter el proyecto al Consejo Nacional de Planeación, efectuar las modificaciones que considere pertinente de acuerdo al concepto del Consejo y presentar el proyecto dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial, ii) El proyecto en la fase de aprobación consagra ciertas restricciones, como la exigencia de obtener el visto bueno del Gobierno para incrementar endeudamiento o incluir proyectos de inversión.

3.- La Corte Constitucional, en sentencia C-305 de 2004, Magistrado Ponente Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló:

“Tanto la Constitución como la Ley Orgánica fijan algunos límites a esta libertad congresional: uno primero es el que surge de los artículos 342 de la Carta y 22 de la Ley 152 de 1994, normas que indican que el Congreso puede modificar únicamente “el Plan de Inversiones”; al paso que el artículo 23 de esta última ley señala que durante el trámite legislativo Gobierno puede modificar “cualquiera de las partes del Plan Nacional de Desarrollo”. De esta manera, es más amplia la

facultad de introducir modificaciones que se le reconoce al Gobierno que al Congreso, pues este último sólo puede hacerlo en materia de “Plan de Inversiones”, distinción que resulta del hecho de que el Ejecutivo de turno ha sido elegido con fundamento en un programa de gobierno concreto propuesto a los electores, por lo cual la posibilidad de llevarlo a ejecución debe serle respetada.”

El Congreso solo puede modificar el plan de inversiones, mientras que el Ejecutivo puede modificar cualquiera de las partes del Plan Nacional de Desarrollo.

4.- La Corte Constitucional, en Sentencia C-539 de 2008, Magistrado Ponente Doctor Humberto Antonio Sierra Porto, consideró:

“En buena medida la Ley del Plan Nacional de Desarrollo constituye la concreción legislativa del programa de gobierno propuesto por el primer mandatario, de ahí que sean explicables las restricciones que impone la Carta de 1991 al Congreso durante el trámite de esta ley. En primer lugar, cabe recordar que de conformidad con el segundo inciso del artículo 154 constitucional, la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo e inversiones públicas cuenta con iniciativa gubernamental exclusiva. A lo anterior se añade que la libertad de configuración del Congreso de la República durante el trámite de esta ley cuenta con una doble restricción. Por una parte, el último inciso del artículo 341 constitucional ha sido entendido en el sentido que por iniciativa de los congresistas sólo puede ser modificado el Plan de Inversiones, es decir, que le está vedado a los miembros de la rama legislativa alterar la Parte General del Plan y por ende modificar, enmendar o adicionar los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental contenidos en el proyecto presentado por el Gobierno.” (Subrayado fuera del texto).

El artículo 341 de la Constitución establece que por iniciativa del Congreso solo puede modificarse el Plan de Inversiones, es decir que la parte general del Plan no puede ser modificada, enmendada o adicionada.

5. Disposiciones superiores y manifestaciones de la Corte Constitucional destacan la importancia de cumplir a cabalidad el procedimiento para la preparación, examen y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Tanto al Congreso de la República como al Gobierno Nacional se le imponen precisas y perentorias funciones y formalidades que de no cumplirse podrían repercutir necesariamente en la inconstitucional de las normas adoptadas.

En uno y otro caso deben surtirse distintas etapas. Por ejemplo, al Gobierno Nacional le corresponde elaborar el Plan y presentarlo a las instancias que la Constitución y la Ley le exigen, entre estas el Consejo Nacional de Planeación y el de Política Económica y Social – Conpes-. Y, al Congreso de la República le asiste aprobarlo e incluso modificarlo, en este último caso con sujeción a sus funciones, previa consulta y concertación con el Gobierno Nacional, evitando alterar el equilibrio financiero y los propósitos gubernamentales.

Resulta de la mayor importancia entonces llevar a cabo las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para evitar afectar la constitucionalidad del Plan que eventualmente se adopte.

Ahora, también conforme a las normas citadas, el Plan Nacional de Desarrollo no es otra cosa que la formulación de los programas que el Gobierno desarrollará durante el período de cuatro (4) años para el que fuera elegido. Entonces, lo que se pretenda adoptar por este medio debe cumplir con las finalidades que aquel proyecto se cumplan en tal lapso y obedecer a políticas públicas que guarden relación con la naturaleza jurídica de la norma. Sobre esto se ha pronunciado la Corte Constitucional.

Al respecto se sugiere revisar la Sentencia, aún no publicada, dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en relación con la inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 que señala que los independientes cotizan al Sistema de Seguridad Social sobre el 40 % de la remuneración mensual recibida, en la medida en que no debía ser una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Demandantes: **María del Mar Arciniegas y Juan Esteban Sanín Gómez.**

Así las cosas, se ha propuesto notar la naturaleza jurídica del Plan Nacional de Desarrollo, las facultades, prohibiciones y competencias para su preparación y aprobación y exponer las manifestaciones de la Corte Constitucional al respecto.

Las definiciones en materia arancelaria se sujetan a los criterios generales fijados por el Legislador y al marco institucional donde están el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (AAA) y el Consejo Superior de la Política Exterior Colombiana.

6.- Resulta contradictorio con los preceptos constitucionales y con la naturaleza de la ley del Plan Nacional de Desarrollo fijar tarifas arancelarias sin considerar los estudios, valoraciones y exámenes realizados por el Gobierno Nacional y en contravención del derecho de igualdad al no involucrar a todos los actores de la cadena ni valerse de la opinión de otros sectores.

Lo anterior, toda vez que las proposiciones presentadas no están acompañadas de cifras, datos, análisis o estudios que determinen su conveniencia, por ejemplo, en materia de afectación de indicadores de la economía nacional, de reducción o aumento de contrabando, vulneración de los acuerdos comerciales suscritos con otros países, entre otros. Y estos, con excepción a la misma naturaleza de la Ley del Plan debían haberse consignado en su parte general, la cual es preparada de manera exclusiva por el Gobierno Nacional.

VI. DEL ANÁLISIS SOBRE LA LEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS INTERNACIONALES.

1.- MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, RESPETO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES Y RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

- **Preámbulo y artículos 9, 150-16, 224, 226 y 227 de la C.P. y artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales.**

De conformidad con lo dispuesto en las normas superiores citadas, el Estado colombiano reconoce la necesidad de la integración económica, social y política con las demás naciones del mundo, para lo cual relieves la importancia de celebrar tratados y convenios con otros Estados y organismos internacionales sobre bases de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional.

En el artículo 9 de la C.P., se determina que las relaciones exteriores de Colombia se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por nuestro país, dentro de los cuales se encuentra el principio *pacta sunt servanda* (art. 26 Convención de Viena), que se enuncia así: “*Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe*”. Igualmente, establece el artículo 27 de la citada Convención que “*Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado*”.

Significa lo anterior que, tal como lo consideró la sentencia de la Corte Constitucional C-276 de 1993, “*Una vez perfeccionado, el tratado internacional establece, por definición una regla de conducta obligatoria para los Estados signatarios, plasmada en el principio pacta sunt servanda, que es un principio de seguridad, de justicia y de moral internacionales*”.

En el ámbito económico se procura que a través de acuerdos y convenios con otros Estados y organismos internacionales, se satisfagan necesidades comunes de aquellos, mediante el cumplimiento de múltiples objetivos, tales como: crear condiciones favorables al comercio internacional mediante la remoción de obstáculos que lo limiten o afecten, garantizar la igualdad de trato en las relaciones económicas, contribuir al crecimiento y al desarrollo económicos de las diferentes naciones, y asegurar a los actores del comercio internacional la previsibilidad de las condiciones bajo las cuales se desarrolla el intercambio comercial.

Colombia como Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se encuentra sujeta al marco jurídico e institucional creado por dicho organismo, que constituye la fuente para la aplicación y vigilancia de los acuerdos que se implementen, así como para la solución de las diferencias que puedan surgir en su interpretación y aplicación.

De igual manera, según el artículo 150, numeral 16 de la C.P., el Estado colombiano bien puede, en virtud de los tratados que celebre, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados. Tal es el caso de OMC, a la cual el Estado Colombiano se adhirió, en cuyo seno se han establecido normas que rigen el comercio internacional y que son obligatorias para los países Miembros de dicha Organización.

La pertenencia a la OMC necesariamente conlleva para el Estado colombiano la obligación de someterse a las decisiones que en materia de comercio exterior regule aquella a través de acuerdos. Es así como en el orden interno, la Ley 1609 de 2013 - Ley Marco de Aduanas, exigen que, al modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, el Gobierno Nacional debe tener en cuenta que esas disposiciones se adecúen a los convenios internacionales, de manera tal que se facilite la aplicación de los mismos. Así mismo la Ley 7 de 1991 - Ley Marco de Comercio Exterior, exige que para la protección de la industria nacional, se deben respetar los acuerdos suscritos y vigentes para Colombia

La violación de la ley nacional y de los tratados y convenios internacionales suscritos y vigentes para Colombia ocurrió, porque al expedir los artículos demandados de la Ley 1955 de 2019, por una parte, se adoptaron normas que contradicen el espíritu y la letra de aquellas disposiciones de carácter superior, y por la otra, se omitió la aplicación de otras normas que debieron ser observadas.

En efecto, el Artículo 3º de la Ley 1609 de 2013, literales a) y b) - Ley Marco de Aduanas, ordena:

"Artículo 3°. Objetivos. Al modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta los siguientes objetivos:

- a) Facilitar el desarrollo y la aplicación de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos y vigentes para Colombia, y la participación en los procesos de integración económica;
- b) Adecuar las disposiciones que regulen el Régimen de Aduanas a la política comercial del país, al fomento y protección de la producción nacional a los acuerdos, convenios y tratados suscritos y vigentes para Colombia, a los principios y normas del derecho Internacional. En ejercicio de esta función también tendrá en cuenta las recomendaciones que expidan organismos internacionales de comercio;"

Por lo tanto, no es posible que el Congreso de la República exija cumplir estos requisitos al gobierno nacional, que como ya se explicó es el competente para modificar aranceles, pero cuando se atribuye competencias que no le corresponden, olvida que existen obligaciones internacionales, que impiden legislar en Colombia en contravía de los compromisos con la OMC. Tal como se explicó en la exposición de motivos de la Ley 1609 de 2013 (Ley Marco de Aduanas), el alcance de este artículo al momento de modificar tarifas arancelarias y demás normas aduaneras, es que se observen rigurosamente estos objetivos, estos parámetros:

"En el artículo 3°, se consagran los objetivos y criterios que guiarán al Ejecutivo al modificar el régimen de aduanas, impulsando la integración económica, la facilitación y agilidad de las operaciones de comercio exterior; avanzando a la filosofía de facilitación del comercio que debe imperar en las políticas de funcionamiento de los organismos que intervienen en el desarrollo de este, tales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces, pero esencialmente en la Aduana. Del mismo modo ello no impedirá la adecuación de la normatividad en materia aduanera dentro de las instancias multilaterales y regionales teniendo prelación lo estipulado por la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, y el Convenio Internacional de Kioto." (Resaltado y subrayado fuera del texto original)

*"Desde el año 1995 Colombia adhiere a la Organización Mundial de Comercio, haciendo parte entre otros Grupos al de CAIRNS de productos tropicales, negociaciones antidumping, suscribiendo el documento W52, llevando con ello a adoptar en su legislación interna medidas que lo lleven a cumplir con los Acuerdos Vigentes en la OMC, defendiendo el sistema multilateral a través de la adopción de medidas que permitan la facilitación en el comercio, pero que a su vez aseguren el control en las operaciones de orden nacional e internacional."*² (Resaltado y subrayado fuera del texto original)

Como puede observarse con facilidad, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, concretamente en los artículos 274 y 275 se violó la norma antes transcrita, al haber modificado los aranceles y tarifas concernientes al régimen de aduanas sin tener en cuenta los objetivos atinentes a facilitar el desarrollo y la aplicación de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos y vigentes para Colombia y al no adecuar las disposiciones que regulen el Régimen de Aduanas a los principios y normas del derecho Internacional, ni a

¹ (bis)

² INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 248 DE 2012 CÁMARA, 138 DE 2012 SENADO, Bogotá, D. C., miércoles 24 de octubre de 2012. Gaceta del Congreso No. 741 del 30-10-2012.

las recomendaciones que expidan los organismos internacionales de comercio, y concretamente, entorpeciendo y omitiendo la aplicación del Acuerdo General del GATT, Acuerdo de la Ronda de Uruguay, Acuerdo de Marrakech, suscrito el 15 de abril de 1994, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio.

Ahora, si bien es cierto que el artículo 10 de la Ley 7 de 1991 - Ley Marco de Comercio Exterior, autoriza al Gobierno, no al Congreso, para adoptar las medidas necesarias para amparar la producción nacional contra las prácticas desleales y restrictivas del comercio internacional, entre ellas, la imposición de medidas antidumping; el artículo 29 de la misma ley le establece un límite, cual es el respeto de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes, que deben ser observados independientemente de la autoridad que pretenda legislar sobre la protección a la industria nacional. En tal sentido estos artículos señalan:

***"ARTICULO 10.** El Gobierno Nacional amparará la producción nacional contra las prácticas desleales y restrictivas de comercio internacional. Para tal efecto regulará la protección de la producción nacional contra esas prácticas y señalará los organismos y procedimientos para hacer aplicables las disposiciones que expida sobre la materia.*

En tales disposiciones el Gobierno Nacional fijará los requisitos, procedimientos y factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos provisionales o definitivos que, con el fin de prevenir y contrarrestar dichas prácticas, podrán imponer la autoridad competente.

***"ARTICULO 29.** Las disposiciones de la presente Ley y las que se expidan en su desarrollo se entenderán sin perjuicio de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes".*

Adicionalmente se violaron las siguientes normas:

2.- ACUERDO DE MARRAKECH (APROBADO POR LA LEY 170 DE 1994), ARTICULO XVI, RELATIVO A DISPOSICIONES VARIAS, NUMERAL 4.

Establece la citada disposición lo siguiente:

Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos."

Así lo expresó claramente la Corte Constitucional en la Sentencia C-137/95, cuando se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 170 de 1994, mediante la cual Colombia aprobó los Acuerdos de la OMC, como país Miembro de esta Organización Internacional:

"En cuanto a las obligaciones, pueden señalarse éstas, que por ser recíprocas no traen consigo una condición desfavorable o inequitativa para ninguno de los Miembros de la Organización:

a) Aplicación del trato de nación más favorecida, en virtud del cual si Colombia otorga a otro país un trato más favorable en cualquier aspecto del Comercio, deberá extenderlo inmediatamente a todos los demás Miembros. Este principio

admite excepciones en tratándose de acuerdos de integración regional, como el Grupo Andino;

b) Principio del Tratamiento Nacional, que implica el compromiso de cada Miembro de no dar un tratamiento menos favorable a un bien o un servicio importado, con relación al otorgado a uno similar de origen nacional, en lo relativo a impuestos y reglamentaciones interiores;

c) Notificación de todas las modificaciones sobre su política comercial, en cuanto afecten sus obligaciones en la OMC, de conformidad con los procedimientos acordados;

d) Revisión periódica de la política comercial de cada país, por el Consejo General de la OMC; y,

e) Compatibilidad de la legislación en materia de comercio internacional, con las disposiciones de la OMC y sus Acuerdos.

Significa lo anterior que Colombia no está autorizado para expedir leyes internas, reglamentos y procedimientos administrativos que desconozcan las obligaciones adquiridas internacionalmente por Colombia en los Acuerdos de la OMC. Tal disposición es mandatoria, pues la norma advierte que cada Miembro del Acuerdo, entre los cuales se encuentra Colombia, “se asegurará” de la conformidad de sus normas con las obligaciones contraídas a través de los Anexos y Acuerdos anexos (Acuerdo Antidumping, Acuerdo de Salvaguardia y Acuerdo al Valor del GATT, Listas Consolidadas, etc.), tal como lo determinó el Informe del Grupo Especial y la decisión del Órgano de Apelación, de la OMC, en los procesos que se suscitaron por el incumplimiento de Colombia en su legislación interna relativa al sector de confecciones y calzado, en los cuales conminaron a Colombia a poner la legislación nacional en consonancia con los compromisos internacionales contenidos en los acuerdos de la OMC. Es decir, que el cumplimiento de éstos no constituye una obligación meramente potestativa del Estado colombiano, pues cualquier acción tendiente a acogerse a las excepciones previstas en los respectivos acuerdos, debe hacerse dentro del marco normativo previsto también en los acuerdos. Tal como ya lo había hecho.

No hay que olvidar que la OMC dio un trato especial al sector de textiles y confecciones mediante el “Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido”, que dio un período de transición entre el año 1994 y el año 2005, para que este sector hiciera las reconversiones, adaptaciones e inversiones necesarias para que países como el nuestro pudiera competir en franca lid con los demás países miembros de la OMC, algunos países hicieron la tarea, el nuestro no hizo lo necesario y ahora pretende solucionar todas sus falencias con establecimiento de aranceles violando normas nacionales e internacionales.

En efecto, tales situaciones se presentaron a raíz de medidas para controlar precios de importación en el sector de textiles, que violaron el Acuerdo al Valor del GATT y por el establecimiento de aranceles mixtos que violaron las tarifas máximas consolidadas y por lo tanto el Acuerdo General del GATT, información que no puede ser ignorada al momento de tratar de legislar nuevamente sobre este sector, veamos la información tomada de la página WEB de la OMC:

- **Proceso ante el órgano de Solución de Diferencias de la OMC DS 366 Panamá vs Colombia — Precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada**

“12 de julio de 2007, Panamá solicitó la celebración de consultas con Colombia en relación con: i) los precios indicativos aplicables a mercancías específicas del sector textil y de calzado; y ii) las restricciones de los puertos de entrada con respecto a determinadas mercancías.

La solicitud de Panamá con respecto a los precios indicativos se refiere a una serie de resoluciones promulgadas en junio de 2007 por las que se establece un mecanismo de precios indicativos. Más concretamente, Panamá alega que Colombia obliga a los importadores de determinadas mercancías a pagar derechos de aduana y otros derechos o cargas e impuestos sobre la base de los precios indicativos y no de los métodos de valoración establecidos en el artículo VII del GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

Además, Panamá alega que la base imponible del impuesto de Colombia sobre las ventas respecto de los productos importados se basa en el precio indicativo, mientras que la base imponible del impuesto sobre las ventas respecto de los productos nacionales similares se basa en el valor de transacción. Según Panamá, la diferencia entre las bases imponibles da lugar, por consiguiente, a la imposición a los productos importados de una carga impositiva sobre las ventas superior a la que grava los productos nacionales similares.

Actuaciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación

En su reunión de 22 de octubre de 2007, el OSD estableció el Grupo Especial. Las Comunidades Europeas, el Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, la India y el Taipei Chino se reservaron sus derechos como terceros. Posteriormente, China y Turquía se reservaron sus derechos como terceros. El 8 de febrero de 2008, se estableció la composición del Grupo Especial.

*El 27 de abril de 2009 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. **El Grupo Especial aceptó las alegaciones de Panamá de que el inciso e) del párrafo 5 del artículo 128 del Decreto N° 2685 y el párrafo 7 del artículo 172 de la Resolución N° 4240, así como las diversas resoluciones en las que se establecen precios indicativos, son incompatibles “en sí mismos” con la obligación establecida en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de aplicar, en orden secuencial, los métodos de valoración previstos en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y con los apartados b) y f) del párrafo 2 del artículo 7 de dicho Acuerdo.** Énfasis añadido.*

(...)

El Grupo Especial aceptó las alegaciones de Panamá de que la medida relativa a los puertos de entrada es incompatible con el párrafo 1 del artículo I, las frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo V, la primera frase del párrafo 6 del artículo V y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, y se abstuvo de pronunciarse por separado sobre las alegaciones de Panamá de que esta medida es incompatible con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994. Rechazó además la defensa de Colombia basada en que la medida relativa a los puertos de entrada está justificada al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. Énfasis añadido

El Grupo Especial llegó a la conclusión de que en la medida en que Colombia había actuado de manera incompatible con las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y del GATT de 1994, ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para Panamá de dichos Acuerdos y recomendó que Colombia pusiera

sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y el GATT de 1994." Énfasis añadido

- **Proceso ante el órgano de Solución de Diferencias de la OMC DS 461 Panamá vs Colombia — Medidas relativas a la imposición de aranceles mixtos a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado, decisión del Grupo Especial que fue confirmado por el fallo que resolvió el recurso de apelación presentado por Colombia**

El 18 de junio de 2013, Panamá solicitó la celebración de consultas con Colombia de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) y el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) con respecto a la imposición por parte de Colombia de un arancel compuesto que afecta la importación de productos textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de Panamá.¹

En su solicitud de establecimiento de un grupo especial, Panamá identificó a la medida en litigio en esta diferencia como "el arancel compuesto" impuesto en virtud del Decreto del Presidente de la República de Colombia No. 074, de 23 de enero de 2013, sobre las importaciones de determinados productos textiles, prendas de vestir y calzado ("Decreto No. 074"). En específico, Panamá señaló que el arancel compuesto impugnado se compone de un gravamen ad valorem, expresado en términos porcentuales respecto del valor en aduana de la mercancía, así como de un gravamen específico expresado en unidades monetarias por unidad de medida. En el caso de mercancías comprendidas en los capítulos 61, 62, 63 y en la partida 64.06 del Arancel de Aduanas de Colombia, el arancel compuesto era igual al 10% del valor en aduana de la mercancía, más USD 5 por kilogramo bruto (USD 5/kg). Asimismo, para las mercancías clasificadas en el Capítulo 64, a excepción de la partida 64.06, el arancel compuesto era igual al 10% de valor en aduana, más USD 5 por par (USD 5/par). El arancel compuesto tenía una vigencia de un año a partir del 1 de marzo de 2013 y no era aplicable a las importaciones originarias de los países con los cuales Colombia tiene acuerdos de libre comercio vigentes. El gravamen específico de USD 5/kg o USD 5/par se incluía dentro de la base imponible del impuesto al valor agregado (IVA).

(...)

En su primera comunicación escrita, Panamá señaló que el Decreto No. 074 fue modificado por el Decreto del Presidente de la República de Colombia No. 456, de 28 de febrero de 2014 ("Decreto No. 456"), e indicó que a partir de ese momento, "Panamá se centraría en la medida tal y como se encuentra vigente en la actualidad"

(...)

Panamá se refirió a los artículos 1 y 2 del Decreto No. 456 y señaló que, de conformidad con estas disposiciones, el componente ad valorem del arancel compuesto es del 10%, mientras que el componente específico varía en función del producto y del precio f.o.b. declarado, como sigue: (i) respecto de los productos clasificados en los capítulos 61, 62, 63 y en la línea arancelaria 6406.10.00.00, el gravamen específico es de USD 5/kg cuando el precio declarado f.o.b. sea menor de o igual a USD 10/kg, y de USD 3/kg cuando el precio declarado f.o.b. sea mayor de USD 10/kg; (ii) respecto de los productos clasificados en el capítulo 64, a excepción de la partida 64.06, el gravamen específico es de USD 5/par cuando el precio declarado f.o.b. sea menor de o igual a USD 7/par, y de USD 1,75/par cuando el precio declarado f.o.b. sea mayor a USD 7/par.¹²

2019
COD. 4112
OMBANA
Carretera de Bogotá D.C.

*Panamá solicita que el Grupo Especial constate que el arancel compuesto impuesto por Colombia es incompatible con*15:

- a. El artículo II:1 (b), primera oración, del GATT de 1994 y la Lista de Concesiones de Colombia; y*
- b. El artículo II:1 (a) del GATT de 1994 y la Lista de Concesiones de Colombia.*

El Informe del Grupo Especial rendido el 15 de noviembre de 2015, estableció las siguientes constataciones:

Con respecto a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61, 62, 63 y la línea arancelaria 6406.10.00.00, el arancel compuesto constituye un derecho de aduana propiamente dicho que excede los niveles consolidados en la Lista de Concesiones de Colombia y es, por lo tanto, incompatible con el artículo II:1 (b), primera oración, del GATT de 1994, en los siguientes supuestos:

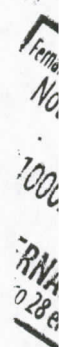
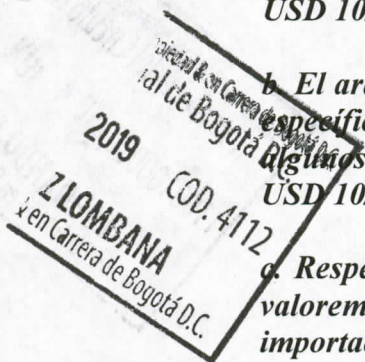
- a. El arancel que consta de un componente ad valorem de 10% más un componente específico de USD 5/kg, cuando el precio de importación f.o.b. sea igual o inferior a USD 10/kg;***
- b. El arancel que consta de un componente ad valorem de 10% más un componente específico de USD 5/kg, cuando se importen productos de una misma subpartida algunos con precios de importación f.o.b. superiores y otros inferiores al umbral de USD 10/kg; y,***
- c. Respecto de la subpartida 6305.32, el arancel que consta de un componente ad valorem de 10% más un componente específico de USD 3/kg, cuando el precio de importación f.o.b. sea superior a USD 10/kg pero inferior a USD 12/kg.***

Con respecto a las importaciones de productos clasificados en las diversas partidas arancelarias del capítulo 64 sujetas a la medida en litigio, el arancel compuesto constituye un derecho de aduana propiamente dicho que excede los niveles consolidados en la Lista de Concesiones de Colombia y es, por lo tanto, incompatible con el artículo II:1 (b), primera oración, del GATT de 1994, en los siguientes supuestos:

- a. El arancel que consta de un componente ad valorem de 10% más un componente específico de USD 5/par, cuando el precio de importación f.o.b. sea igual o inferior a USD 7/par; y***
- b. El arancel que consta de un componente ad valorem de 10% más un componente específico de USD 5/par, cuando se importen productos de una misma subpartida algunos con precios de importación f.o.b. superiores y otros inferiores al umbral de USD 7/par.***

En los supuestos señalados en los párrafos anteriores, el arancel compuesto concede además un trato menos favorable que aquél previsto en la Lista de Concesiones de Colombia, de forma incompatible con el artículo II:1 (a) del GATT de 1994.

Es decir se le dio en todo la razón a Panamá, quien adoptó, además, medidas retaliatorias contra Colombia, afectando a varios sectores de la economía nacional, como exportaciones de flores (entre otras: rosas, claveles, crisantemos, calas, alstroemerias y gladiolos) a las cuales les incrementa el arancel a 30%, café tostado sin descafeinar con un nuevo arancel



de 60%, a la hulla bituminosa le incrementa el arancel a 15%, al cemento blanco le aumenta el arancel a 5% y el papel higiénico queda con un arancel de 30%, prendas de vestir y accesorios con el 30%.

De tal suerte que siendo claras las obligaciones del país a partir de la adopción de los Acuerdos de la OMC, en el sentido de que las normas nacionales deben ser compatibles con los Acuerdos suscritos y vigentes, la Ley 1955 de 2019, artículos 274 y 275, no son compatibles con el Artículos VI, XIX y VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio GATT 1994 y, por lo tanto, Colombia se expone nuevamente, por las medidas arbitrarias que ha sido política estatal en el sector de textiles y confecciones, a demandas y condenas en el concierto internacional y nacional.

3.- LOS ARTÍCULOS VI Y XIX DEL ACUERDO DEL GATT 1994 DE LA OMC (APROBADO POR LA LEY 170 DE 1994), RELATIVO A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTIDUMPING Y SALVAGUARDIAS, DESARROLLADAS EN LOS ACUERDOS ANTIDUMPING Y DE SALVAGUARDIAS DE LA OMC, Y A NIVEL NACIONAL, EN LOS DECRETOS 1750 DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2015, 1480 DEL 11 DE MAYO DE 2005 Y 1407 DE 1999, POR FALTA DE APLICACIÓN

El Congreso de la República expidió la Ley 1955 de 2019, artículo 274 y 275, argumentando la necesidad de proteger a la industria nacional de las importaciones de confecciones y calzado, sin atender los postulados del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio- GATT- 1994 y, por ende, desconociendo los artículos 10 y 29 de la Ley 7 de 1991 - Ley Marco de Comercio Exterior y el artículo 3º literales a) y b) de la Ley 1609 de 2013.

En efecto, no solo porque usurpó competencias del Gobierno Nacional, sino porque si bien es cierto que el artículo 10 de la Ley 7 de 1991 - Ley Marco de Comercio Exterior, autoriza al Gobierno para adoptar las medidas necesarias para amparar la producción nacional contra las prácticas desleales y restrictivas del comercio internacional, entre ellas, la imposición de derechos antidumping, el artículo 29 de la misma ley le establece un límite, cual es el respeto de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes, por lo que también se violaron las normas arriba citadas, que el Congreso le fijó al Gobierno y ahora ignora, las cuales disponen lo siguiente³:

***“ARTICULO 10.** El Gobierno Nacional amparará la producción nacional contra las prácticas desleales y restrictivas de comercio internacional. Para tal efecto regulará la protección de la producción nacional contra esas prácticas y señalará los organismos y procedimientos para hacer aplicables las disposiciones que expida sobre la materia.*

En tales disposiciones el Gobierno Nacional fijará los requisitos, procedimientos y factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos provisionales o definitivos que, con el fin de prevenir y contrarrestar dichas prácticas, podrán imponer la autoridad competente.

³ El artículo 29 de la Ley 7 del 1991 sigue vigente en la medida que el Decreto 1159 de 1999, que lo había derogado, solo estuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 1999, pues fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional en Sentencia C-969 de 1999.

“ARTICULO 29. Las disposiciones de la presente Ley y las que se expidan en su desarrollo se entenderán sin perjuicio de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes”.

En efecto, el artículo VI del Acuerdo General del GATT establece un procedimiento especial para brindar protección a la industria nacional cuando se ve afectado con importaciones masivas a precios dumping (por debajo del valor normal del mercado interno del país exportador o de un país referente si no es reconocido como economía de mercado por Colombia), causando un daño a la industria nacional, dentro del cual se debe probar el daño y la relación de causalidad entre el daño y las importaciones.

Acuerdo que fue reglamentado para garantizar la protección a la industria nacional, mediante el Decreto 1750 de 2015, cuando agotado el procedimiento administrativo, permite adoptar medidas antidumping tendientes a neutralizar el daño, vía imposición de un derecho antidumping que sólo está sujeto al tope máximo requerido para neutralizar el daño sufrido y probado, con la ventaja que este procedimiento permite adoptar medidas provisionales mientras dure la investigación, de ser requeridas para la protección de la industria nacional. Este procedimiento especial permite establecer derechos de protección definitivos hasta por cinco años, prorrogables, sin que se infrinjan los derechos máximos consolidados de la OMC, garantizando el derecho de defensa de todos los importadores afectados, pues basta con demostrar que se importa a precios normales del mercado para que sea excluido de la aplicación de la medida antidumping, con lo cual se garantiza el debido proceso y la protección de la industria nacional, al mismo tiempo que se logra el objetivo buscado por el la Ley demandada, pero sin violación del régimen nacional e internacional.

El Congreso Nacional, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, artículo 274 y 275, violó las normas arriba citadas, por falta de aplicación de los mecanismos internacionales especiales establecidos en el marco de la OMC, como es el Antidumping que es el indicado técnica y jurídicamente en las situaciones de precios irrisorios o precios que no responden al valor normal del mercado.

De tal suerte que el Congreso, a sabiendas de que existe un mecanismo legal técnicamente apropiado para adoptar medidas justas que neutralicen el daño a la industria nacional, aplicable a los exportadores e importadores que realmente estén realizando operaciones desleales, sencillamente lo ignoró con la expedición de la Ley 1955 de 2019. Como consecuencia de lo anterior, también resultaron violados los Decretos 1750 de 2015, “Por el cual se regula la aplicación de derechos “antidumping establecidos en el Artículo VI del Acuerdo General del GATT y de su desarrollo, el Acuerdo Antidumping de la OMC”. Acuerdo de obligatorio cumplimiento para Colombia desde 1994.

El otro mecanismo de defensa comercial establecido en el Acuerdo General del GATT, Artículo XIX, por el cual se autorizan medidas de salvaguardia, en casos de urgencia, para proteger a la industria nacional de importaciones masivas a precios tan bajos que afecten la producción nacional, desarrollado en el “Acuerdo de Salvaguardias” de la OMC y reglamentado en Colombia a través de los Decreto 1480 de 2005 (artículos 1 a 40 del Decreto 1480 de 2005, “Por el cual se reglamenta el Acuerdo de Salvaguardia para productos originarios de la República Popular China”) y mediante el Decreto 1407 de 1999 (por el cual se establece un procedimiento especial para aplicar una medida de salvaguardia para los países miembros de la OMC), Acuerdo y reglamentaciones que fueron ignorados por el Congreso con la expedición de la Ley 1955 de 2019, violados por falta de aplicación,

pues su aplicación no es optativa, cuando invocan la protección a la industria nacional y se cumplen los requisitos exigidos.⁴

La razón de existir de estos procedimientos de defensa comercial, que garantizan la protección a la industria nacional, pero sobre todo garantizan que no existan medidas que afecten el mercado internacional injustificadamente y especialmente, el debido proceso a los importadores que no incurren en importaciones a precios desleales o que no afecten la industria nacional, pues dentro de los procesos administrativos de medidas antidumping o de salvaguardias, pueden ser excluidos los importadores cuando demuestren que no incurren en las prácticas desleales o que no afectan a la industria nacional, cuando, por ejemplo, se establece que no hay producción nacional o la que existe es insuficiente para atender las necesidades del mercado nacional.

En el presente caso no solo no se aplicaron estas normas de defensa comercial, sino que con esta omisión se le violaron los derechos a los importadores regulares que importan a precios del mercado, lo que de contera también viola la Ley marco de aduanas que exige garantías en este sentido a los administrados.

Igualmente, resultan desconocidos los principios constitucionales de igualdad y debido proceso (arts. 13 y 29 C.P.), pues con los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, se les otorgó un mismo trato a quienes están incurriendo en prácticas ilegales, las cuales bien podían ser controladas a través de la aplicación del Decreto 1750 de 2015, 1480 de 2015 y 1407 de 1999 y a quienes no han incurrido en las mismas.

Además, nuevamente reiteramos, se configura, una violación a los compromisos internacionales de Colombia al infringir el artículo 3° literales a) y b) de la Ley 1609 de 2013, al modificar los aranceles y tarifas concernientes al régimen de aduanas sin tener en cuenta los objetivos de facilitar el desarrollo y la aplicación de los convenios y tratados internacionales suscritos y vigentes para Colombia y al no adecuar las disposiciones que regulen el Régimen de Aduanas a dichos acuerdos, a los principios y normas del derecho internacional, y a las recomendaciones expedidas por organismos internacionales de comercio.

4.- EL ARTÍCULO VII DEL ACUERDO GENERAL DEL GATT, DESARROLLADO EN EL ACUERDO AL VALOR DEL GATT, ADOPTADO POR LA DECISIÓN 571 DE 2003 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES⁵, REGLAMENTADA POR LA RESOLUCIÓN 1684 DE 2014⁶ DE LA CAN, INTEGRADO A NUESTRA LEGISLACIÓN POR LA LEY 170 DE 1994

Las normas en referencia establecen el procedimiento especial y el desarrollo de la investigación que permiten tomar medidas correctivas frente al valor declarado al momento de las importaciones, cuando el valor en aduanas declarado no corresponde a valores normales del mercado, y que permiten en estos casos hacer los ajustes al valor correspondientes para que haya transparencia en el valor declarado, además de aplicar las sanciones previstas en el Decreto 2685 de 1999, artículo 499.

En efecto, si lo que se pretende es que se declaren los valores normales del mercado, y no precios irrisorios, al momento de la importación de las confecciones procedentes del

⁴ El Decreto número 1407 de 1999 estableció un procedimiento administrativo especial para la aplicación de medidas de salvaguardia, el cual fue prorrogado por los Decretos números 2793 del 29 de diciembre de 2000, 1268 del 26 de junio de 2001 y 2681 del 17 de diciembre de 2001.

⁵ Publicada en el Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1023, página 1, anexa.

⁶ Resolución 1684 DE 2014, Reglamento Comunitario de la Decisión 571, modificada mediante la Resolución 1828 DE 2016

exterior, existen los mecanismos legales especiales establecidos en el artículo VII del Acuerdo General del GATT, desarrollado en el Acuerdo al Valor en Aduanas de la OMC, acogidos por la Comunidad Andina, cuya omisión constituye una violación al artículo 3 de la ley 1609 de 2013 y de la Decisión 571 de la CAN, normas de aplicación directa e inmediata.

En efecto, el Acuerdo al Valor del GATT no es un mecanismo optativo para Colombia, y omitir su aplicación al proferir la Ley 1955 de 2019, artículos 274 y 275, constituye una violación a todas las normas citadas en el párrafo anterior y por ende, una infracción del artículo 3º, literales a) y b) de la Ley 1609 de 2013, que materializa los convenios internacionales.

Cuando el Congreso expidió la ley demandada, justificando las medidas arancelarias adoptadas en los precios irrisorios declarados en las importaciones de confecciones del capítulo 61 y 62, como se publicitó en los debates en el Congreso, aplicando un mecanismo arancelario de derecho ad valorem y específicos, en lugar de aplicar los mecanismos que prevé el Acuerdo al valor del GATT, la Decisión 571 y las normas contenidas en el Estatuto Aduanero - Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 2000, que lo reglamenta, que obedecen a las normas concertadas en el seno de la OMC, que legalmente habilitan a las autoridades colombianas, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para adelantar las investigaciones por controversias al valor en aduanas declarado y el procedimiento especial previsto para evitar que se declaren precios que no se corresponden con los reales del mercado internacional, aplicando los métodos de valoración y los criterios establecidos por el Acuerdo, a fin de determinar si un valor declarado es aceptable para determinar la base gravable o si requiere ajustes al valor para evitar la subfacturación.

Todas las normas citadas como violadas en este aparte, por omisión en su aplicación, que son de obligatorio cumplimiento para el Gobierno Nacional, permiten ajustar los precios anormales declarados, mediante liquidaciones oficiales de ajustes al valor, incluso con posterioridad a la presentación de las declaraciones de importación, en aplicación de los (6) métodos previstos para determinar el valor en aduanas de acuerdo a los criterios de valoración y pruebas que la misma norma especial prevé, procedimientos que son ignorados pretendiendo suplirlos con la imposición de medidas arancelarias, que técnicamente no corresponden.

De tal suerte que el Congreso expidió la ley acusada, a sabiendas de que existe un mecanismo legal y técnicamente apropiado para adoptar medidas justas que neutralicen los valores irrisorios declarados, aplicable a los productos de procedencia extranjera que se importan al país y que permite respetar y garantizar la actividad legal que despliegan aquellos empresarios colombianos que no incurren en estas prácticas de declarar valores anormales, lo cual garantiza el derecho constitucional del debido proceso en contraposición del proceder arbitrario que entroniza la ley acusada, como ya lo explicamos.

Sobre este punto en particular, es de resaltar, tal como lo analizó ampliamente el Grupo Especial y Órgano de Apelación (del OSD-Órgano de Solución de Diferencias de la OMC), cuando decidió el Recurso de Apelación presentado por Colombia, dentro del proceso DS 461, que aunque su análisis se centró en este punto en particular al Decreto 456 de 2014, que fue el Decreto antecesor del actual, que fue retirado para cumplir con los Fallos de la OMC, que estableció diferentes tarifas dependiendo del precio, el extenso análisis que hizo el Grupo Especial en su reporte y que confirmó el fallo que resolvió el recurso de apelación, y que dadas la estructura de los artículos 274 y 275 de la Ley 1955, tienen plena vigencia, especialmente frente a la arbitrariedad y violación de principios básicos del Acuerdo al Valor del GATT, que aunque se hicieron sobre umbrales de precios de USD10

por KG, para los capítulos 61 y 62, y ahora con umbrales de US20 kg, son similares, veamos:

"(....)

"7.101. Por su parte, el artículo VII del GATT de 1994, así como el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, establecen disciplinas para la determinación del valor en aduana, incluyendo los casos en los cuales las autoridades de un Miembro tengan dudas acerca de la veracidad o exactitud de las informaciones, documentos, o declaraciones presentados a efectos de la valoración en aduana.

"(...)

"7.4.2.5.2.4 Otros aspectos relativos al diseño, arquitectura y estructura del arancel compuesto

"7.351. Más allá de la falta de mención expresa en el texto de los Decretos Nos. 074 y 456 al objetivo de combatir el lavado de activos, el diseño, arquitectura y estructura reveladora de la medida no respaldan el alegato de Colombia de que el arancel compuesto está destinado a combatir el lavado de activos. Lo que se desprende del texto del Decreto No. 456 es que, por su diseño, arquitectura y estructura, la medida impone un gravamen más alto a las importaciones que se efectúan a precios que se ubican por debajo de determinados umbrales. En otras palabras, la medida está destinada a gravar a niveles más elevados a las importaciones de los productos pertinentes que ingresan a precios bajos, sin distinguir ni determinar si dentro de esos precios bajos existe, de hecho, subvaloración, ni si dicha subvaloración está de alguna manera ligada al lavado de activos. (...)(resaltado fuera del texto original)

"7.352. El Grupo Especial entiende que el argumento de Colombia es que los precios de importación que sean inferiores a los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 son artificialmente bajos" y no reflejan condiciones de mercado, por lo que cualquier importación que ocurra a precios declarados por debajo de los umbrales estaría siendo subvalorada con el fin de lavar activos⁷. (Resaltado fuera del texto original)

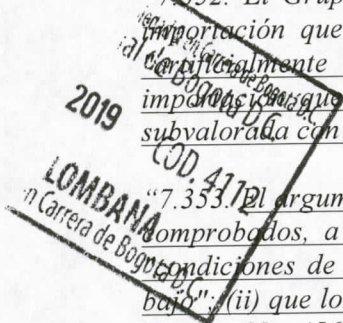
"7.353. El argumento de Colombia asume una serie concatenada de hechos que requieren ser comprobados, a saber: (i) que los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 reflejan condiciones de mercado" y cualquier precio por debajo de los mismos es "artificialmente bajo"; (ii) que los productos importados a precios inferiores a los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 están siendo subvalorados; y (iii) que las importaciones de bienes sujetos al arancel compuesto a precios inferiores a los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 tienen por objeto el lavado de activos. (Resaltado fuera del texto original)

"7.4.2.5.2.5 ¿Existe prueba de que los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 reflejan "condiciones de mercado" y cualquier precio por debajo de los mismos es "artificialmente bajo"?

7.354. Con respecto al primer punto (esto es, si existe prueba de que los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 reflejan "condiciones de mercado" y cualquier precio por debajo de los mismos es "artificialmente bajo"), Colombia ha indicado que los estudios y cálculos en los cuales se basó para determinar los umbrales "constan en hojas [de cálculo] y documentos de trabajo internos. Por tratarse de documentos de trabajo internos, tienen carácter reservado."⁸ Colombia, sin embargo, ha explicado de manera general la metodología usada para determinar estos umbrales de precios. Según Colombia, los umbrales se basan en los precios de mercado a nivel nacional e internacional. A los fines de determinar estos precios, Colombia determinó "puntos de quiebre" o "puntos de referencia" (benchmarks), incluyendo: (i) los precios promedio de importación de los productos pertinentes; (ii) los precios promedios de producción de las materias primas usadas en la fabricación de los

⁷ Colombia, primera comunicación escrita, párrs. 29-36; y segunda comunicación escrita, párr. 36.

⁸ Colombia, respuesta a la pregunta No. 25 del Grupo Especial.



productos, contrastados con los costos de producción en Colombia; (iii) los precios unitarios de importación correspondientes a importadores representativos en Colombia; y, (iv) en el caso del calzado, los precios promedio de importación en terceros países y el precio promedio de importación correspondiente a importadores representativos en Colombia⁹. Colombia afirma que en todos los casos, los umbrales son inferiores a los "puntos de quiebre" o "puntos de referencia" (benchmarks) que se obtuvieron de los cálculos¹⁰; así como que, en el caso de los umbrales para las prendas de vestir, el umbral es "significativamente menor ... que el costo promedio de producción ... y está muy cerca del precio promedio de importación", lo cual evitaría que se proteja a la producción nacional¹¹.

"7.355. Resulta imposible para este Grupo Especial, sobre la base de la información disponible, comprobar que, como afirma Colombia, los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 reflejan los precios de las transacciones en condiciones normales de mercado para los productos en cuestión. En todo caso, Colombia tampoco ha explicado cómo el cálculo de umbrales de precios únicos establecidos sobre una base fija para cada una de las dos amplias categorías de productos que abarca la presente diferencia, sin un examen de las características concretas de la transacción específica de que se trate, puede resultar útil a los fines de determinar los precios de mercado y los niveles por debajo de los cuales los precios de importación deben ser considerados "artificialmente bajos". Al mismo tiempo, el Grupo Especial toma nota del argumento de Colombia de que el Decreto No. 456 cubre alrededor de 300 líneas arancelarias (a 10 dígitos), con lo cual la utilización de diferentes umbrales dificultaría considerablemente su administración y crearía incentivos para que los grupos criminales declararan incorrectamente las subpartidas a las que corresponden las mercancías¹². (Resaltado fuera del texto original)

"7.356. Efectivamente, este Grupo Especial nota que el arancel compuesto opera sobre la base de dos umbrales de precios, un primer umbral para los productos textiles y las prendas de vestir (más precisamente para los productos correspondientes a los capítulos 61, 62, 63 y a la línea arancelaria 6406.10.00.00) y un segundo umbral para el calzado (más precisamente para los productos correspondientes al capítulo 64, a excepción de la partida arancelaria 64.06). (Resaltado fuera del texto original)

"7.357. En particular, no queda claro cómo la metodología usada por Colombia ha tomado en cuenta las posibles diferencias que pudieran existir entre los precios de importación de los distintos productos importados, dentro de cada una de las amplias categorías que estos umbrales abarcan, en términos de factores tales como: los costos de producción; los materiales componentes; los niveles de calidad; las marcas de comercio; la estacionalidad, gustos y preferencias del consumidor; e incluso la naturaleza misma de los productos bajo consideración¹³. Colombia tampoco ha explicado cómo tales umbrales únicos tomarían en cuenta las posibles diferencias en precios de importación que se podrían producir, incluso con respecto a importaciones de productos idénticos, dependiendo de las circunstancias de las operaciones de importación, incluyendo las condiciones de venta y las cantidades. (resaltado fuera del texto original)

"7.358. Más aún, de la información proporcionada por Colombia se desprende que, al menos en el caso del calzado, el umbral de precios establecido en el Decreto No. 456 (USD 7/par) resulta superior al costo de producción del calzado en Colombia (USD 6,2 par) y al precio de importación de uno de los dos principales importadores de calzado en Colombia (USD

⁹ Véase Colombia, segunda comunicación escrita, párrs. 31-35; declaración inicial en la primera reunión del Grupo Especial, párrs. 37-44; declaración inicial en la segunda reunión del Grupo Especial, párr. 40; respuesta a la pregunta No. 29 del Grupo Especial.

¹⁰ Colombia, segunda comunicación escrita, párr. 31; declaración inicial en la segunda reunión del Grupo Especial, párr. 40.

¹¹ Véase Colombia, declaración inicial en la primera reunión del Grupo Especial, párr. 44; respuesta a la pregunta No. 29 del Grupo Especial, párrs. 69-70.

¹² Colombia, respuesta a la pregunta No. 112 del Grupo Especial.

¹³ Véase Colombia, respuesta a la pregunta No. 27 del Grupo Especial.

6,9/par)¹⁴. Colombia ha afirmado al respecto que los costos de producción en Colombia no incluyen costos adicionales (como el transporte, la comercialización y la utilidad) y que el importador en cuestión también realizó importaciones a precios superiores a USD 7/par y que otros importadores tuvieron precios de importación aún superiores¹⁵. No obstante lo anterior, los precios a los cuales se refiere Colombia para el cálculo de sus "puntos de referencia" (benchmarks) son precios promedio. Por tal razón, resulta posible asumir que el costo promedio de producción de USD 6,2/par para el calzado en Colombia significa, en la práctica, que para ciertos productos del calzado y para ciertos productores en Colombia el precio puede ser inferior o superior. Por lo demás, el argumento de Colombia se refiere a los costos de producción del calzado en Colombia y no excluye que los costos de producción en otros países puedan ser significativamente inferiores. Del mismo modo, el precio de importación de USD 6,9/par corresponde a uno de los dos principales importadores de calzado que, según Colombia, fue tomado en cuenta como representativo para la determinación del umbral del precio en el Decreto No. 456. Tratándose de un precio promedio de importación, el argumento de Colombia de que el importador en cuestión realizó importaciones a precios superiores a USD 7/par, significa necesariamente que también realizó importaciones a precios inferiores al umbral del precio en el Decreto No. 456. En todo caso, lo anterior contradice la afirmación de Colombia de que, en todos los casos, los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 son inferiores a los "puntos de quiebre" o "puntos de referencia" (benchmarks) que se obtuvieron de los cálculos¹⁶.

"7.359. En definitiva, no se puede descartar que la importación de mercancías a precios inferiores a los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 pudiera en la práctica reflejar precios "artificialmente bajos", que no reflejen condiciones de mercado. Sin embargo, de todos los argumentos presentados por Colombia, y las pruebas disponibles, no existe prueba de que los umbrales contenidos en el Decreto No. 456 puedan resultar determinantes para establecer que la importación de mercancías a precios por debajo de los mismos necesariamente esté ocurriendo a precios "artificialmente bajos", que no reflejen precios reales o condiciones de mercado. (Resaltado fuera del texto original)

"7.4.2.5.2.6 ¿Existe prueba de que los productos importados a precios inferiores a los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 están siendo subvalorados?

(...)

7.362. Con respecto al segundo punto (esto es, si existe prueba de que los productos importados a precios inferiores a los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 están siendo subvalorados), Colombia ha afirmado que "utiliza el término 'subfacturación' para referirse de manera abreviada a importaciones a precios artificialmente bajos que no corresponden a precios reales o de mercado. Las importaciones a precios artificialmente bajos comúnmente utilizan facturas ficticias en las que no se refleja el precio pagado por la mercancía.¹⁷"

"7.363. La noción de subfacturación o subvaloración alude a una situación en la cual el valor declarado en la factura de una transacción determinada es inferior al valor realmente pagado o por pagar. Como se ha indicado en los párrafos anteriores, no existe prueba alguna de que la importación de mercancías a precios por debajo de los umbrales contenidos en el Decreto No. 456 necesariamente esté ocurriendo a precios "artificialmente bajos", que no reflejen los precios reales o de mercado, ni el valor realmente pagado o por pagar en la transacción de que se trate. Más aún, considerando la amplia diversidad de productos sometidos al arancel compuesto, la importación de mercancías a precios de importación por encima de los umbrales contenidos en el Decreto No. 456 tampoco significa necesariamente que los precios reflejen precios reales o de mercado ni que las mercancías no estén siendo subvaloradas. (resaltado fuera del texto original)

¹⁴ Colombia, declaración inicial en la primera reunión del Grupo Especial, párr. 43; respuesta a la pregunta No. 29 del Grupo Especial, párr. 71.

¹⁵ Colombia, respuesta a las preguntas Nos. 114 y 115 del Grupo Especial.

¹⁶ Colombia, segunda comunicación escrita, párr. 31; declaración inicial en la segunda reunión del Grupo Especial, párr. 40.

¹⁷ Colombia, respuesta a la pregunta No. 41 del Grupo Especial.

"7.364. Los estudios aportados por las partes no son concluyentes con respecto a que la subvaloración suceda de manera exclusiva o siquiera preponderante en importaciones de productos con precios "bajos". Un estudio conjunto de la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia sobre operaciones de lavado de activos relacionadas con contrabando afirma que "la incidencia del contrabando [asociado con operaciones de lavado de activo] es mayor en artículos de alta demanda con precios bajos y sin descripciones mínimas que permitan su individualización, puesto que estas características facilitan su rápida comercialización"¹⁸. Sin embargo, un estudio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sugiere que, mientras más complejos y de más alto valor son los bienes comerciados, más difícil puede ser para las autoridades aduaneras identificar la sobrevaloración o subvaloración y estimar adecuadamente los derechos o impuestos que corresponden¹⁹. En opinión del Grupo Especial, la subvaloración en importaciones de productos de mayor complejidad y valor, no solamente podría resultar más difícil de identificar, sino que tendría el incentivo adicional que permitiría lavar una mayor cantidad de activos por unidad de mercancía.

"7.365. En todo caso, en la medida en que los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 se establecen sobre una base fija para amplias categorías de productos y sin examen de las características específicas de la transacción de que se trate, no existe indicación alguna de que los productos importados a precios inferiores a los umbrales establecidos en el Decreto No. 456 estén necesariamente siendo subvalorados."

Como bien lo analizó el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en sus decisiones, Colombia no logró probar que las importaciones se estuvieran haciendo a precios que no fueran precios del mercado, tampoco que fueran precios subvalorados, y cuestionó enfáticamente que se determinara un solo precio umbral para todo el universo de productos susceptibles de clasificarse por el capítulo 61 y 62, 63.

Pese a este antecedente, el Congreso, mediante los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, recrea la misma metodología, que resulta contraria al Acuerdo al Valor del GATT, especialmente:

1) En los aspectos relativos al diseño, arquitectura y estructura del arancel compuesto.

Es decir el Congreso, retoma la misma metodología ya criticada ampliamente en los fallos de la OMC, pues el simple hecho de que se tome un solo valor (US20 KG) para todo el universo arancelario de todas las subpartidas que comprende los capítulos 61 y 62 del Arancel, sin entrar a analizar si su metodología ha tomado en cuenta las posibles diferencias que pudieran existir entre los precios de importación de los distintos productos importados, dentro de cada una de las amplias categorías que estos umbrales abarcan, en términos de factores tales como: los costos de producción; los materiales componentes; los niveles de calidad; las marcas de comercio; la estacionalidad, gustos y preferencias del consumidor; e incluso la naturaleza misma de los productos bajo consideración²⁰. Colombia tampoco ha explicado cómo tales umbrales únicos tomarían en cuenta las posibles diferencias en precios de importación que se podrían producir, incluso con respecto a importaciones de productos idénticos,

¹⁸ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Unidad de Información y Análisis Financiero, *Tipologías de Lavado de Activos Relacionadas con Contrabando*, enero de 2006 (prueba documental COL-10), pp. 9-10.

¹⁹ Grupo de Acción Financiera, *Trade-Based Money Laundering*, 23 de junio de 2006 (prueba documental COL-11), pp. 5 y 24. Véase también Grupo de Acción Financiera, *Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones*, marzo de 2010 (prueba documental COL-12), pp. 17-18.

²⁰ Véase Colombia, respuesta a la pregunta No. 27 del Grupo Especial.

dependiendo de las circunstancias de las operaciones de importación, incluyendo las condiciones de venta, de pagos y las cantidades (resaltado fuera del texto original)

En efecto, ¿Cómo comparar el precio de importación, por ejemplo de ropa interior para niños, con el precio de un pantalón para adultos?, ¿Cómo equiparar el valor de un par de medias para bebé, con un abrigo para dama, o una chaqueta para un adulto? ¿Cómo equiparar el valor de un sudadera 100% de poliéster, con una pantalón 100 de dénin o de algodón? ¿Cómo equiparar el precio de una compra de algunas unidades, con la compra de los contenedores, ¿Cómo equiparar el valor de una camisa sin marca, con una camisa de marca acreditada de alto rango?, ¿Cómo equiparar el valor a crédito o el valor con pago anticipado? No es el mismo precio una venta Ex Works que una venta DDP, sin embargo el Congreso decide establecer un solo valor US\$20, para todo el universo de confecciones de los capítulos 61 y 62 del Arancel, para determinar la aplicación del arancel de 37,9% o del 10% más tres dólares Kg bruto, ignorando que esta metodología ya fue analizada y desautorizada en la OMC.

En otras palabras se ignora un concepto básico del valor en aduanas para determinar la base gravable, a saber la similitud entre los productos que se tuvieron en cuenta para determinar el valor USD 20 kg y de aquellos productos importados a los cuales se les aplicará, así como sobre las condiciones de venta.

Arbitrariedades que en parte se pudieran paliar estableciendo precios por subpartida y no por capítulos, pero especialmente aplicando los mecanismos antes descritos de los Acuerdos Antidumping, Salvaguardias y del Valor en Aduanas, porque al menos permitiría a los afectados ser oídos y vencidos en juicio de acuerdo a la ritualidades especialmente establecidas en la legislación, respetando el debido proceso, artículo 29 de la C.N. y no con la arbitrariedad que entroniza la ley acusada.

VII. IMPACTOS ECONÓMICOS QUE PUEDEN PRESENTARSE EN CASO DE QUE ENTREN EN VIGENCIA LAS MEDIDAS ARANCELARIAS PROPUESTAS PARA EL SECTOR TEXTIL.

1.- Expedir los artículos sobre aranceles, tal y como están propuestos, afectaría directamente a los consumidores que deben ser tenidos en cuenta en la cadena o ecuación del sector. El vestuario es el cuarto rubro con mayor peso en la canasta familiar (índice del precio al consumidor), después de los alimentos, vivienda y transporte y está por encima del gasto en salud y educación, por ello un incremento en los aranceles de las confecciones tiene un efecto regresivo al impactar la población de menores ingresos. Se estima que el efecto del incremento de 10 puntos porcentuales del arancel de las confecciones sobre el IPC es de 0.5 puntos porcentuales. Este inevitable aumento en los precios, significa un encarecimiento de aproximadamente un 25% de los precios en el vestuario (arancel pasa de 15% a 37.9%), afectando a 47 millones de colombianos y con efectos perversos sobre el sector formal de las confecciones.

2.- El incremento en el arancel aumentará el ingreso ilegal de este tipo de productos, pues se estaría ampliando el margen de rentabilidad del contrabando abierto del sector. Con esta propuesta se le daría una ventaja de cerca de 50% en precios al contrabando (arancel más IVA más descuento del dólar callejero) por lo cual se puede prever una importante caída en las ventas del comercio formal y por ende de la producción nacional.

3.- La aprobación de estos artículos contradice lo suscrito por el país en los diferentes acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional, generando una violación a los mismos y exponiendo a la Nación al incumplimiento de tratados internacionales, posibles

demandas y retaliaciones. De hecho, Colombia podría exponerse a que importantes socios comerciales tomen decisiones similares o adopten medidas de retorsión en otros sectores, afectando así a sectores totalmente ajenos al sector de las confecciones, la internacionalización de la economía nacional y el aumento de las exportaciones.

De acuerdo a lo anterior, vale la pena hacer mención al concepto emitido por Araujo Ibarra Consultores, respecto de las incompatibilidades de los artículos aquí demandados, frente a los compromisos y obligaciones adquiridos por Colombia en virtud de los Acuerdos Comerciales Vigentes, documento que se adjunta al presente escrito:

“Los Artículos 274 y 275 del PND, establecen dos nuevos niveles arancelarios, según el precio de la mercancía, para las importaciones de los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas, sin especificar si se trata de nuevos aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) y sin mencionar el tratamiento a las importaciones originarias de los países con los cuáles están vigentes Acuerdos Comerciales. Los artículos tal como están redactados, establecerían entonces nuevos aranceles, incluso para las importaciones de confecciones originarias de países con los que tenemos Acuerdos Comerciales vigentes.

De mantenerse este texto tal como fue incorporado en el PND, significaría una abierta vulneración de los compromisos adquiridos por Colombia con nuestros socios comerciales, que sin duda darían origen al inicio de reclamaciones en el marco de las disposiciones de Solución de Controversias. Dichas reclamaciones podrán derivar en retaliaciones para Colombia en productos de otros sectores, que son actualmente exportados a dichos destinos”.

Los artículos demandados estarían estableciendo nuevos aranceles según el precio de la mercancía, incluso para las confecciones originarias de países con los cuales Colombia tiene vigentes Acuerdos Comerciales, es decir, de mantenerse vigentes estos artículos del PND se estarían vulnerando los compromisos adquiridos por Colombia con los socios comerciales, además de las posibles retaliaciones que estos hagan en atención a las disposiciones de Solución de Controversias.

Mas adelante continua señalando que:

“(…) en el caso de las confecciones, Colombia realiza importaciones originarias de 25 países con los cuáles tenemos Acuerdos Comerciales, y que se verían afectados en el evento de aplicarse una medida arancelaria como la establecida en el PND para este sector.

En este caso, estos 25 países estarían facultados para solicitar consultas con el Gobierno Colombiano y exigir que los aranceles sean puestos en conformidad con las obligaciones adquiridas por el país. De mantenerse esta medida, estos 25 países podrían retaliar contra Colombia en los productos que actualmente exportamos hacia dichos destinos”.

Por ejemplo, para el caso de confecciones Colombia realiza importaciones con 25 países con los cuales se tienen acuerdos vigentes, en caso de aplicarse las medidas propuestas por los artículos en mención, quedarían facultados para exigir que estos aranceles sean armonizados con las obligaciones previamente adquiridas en los acuerdos.

4.- Se rompería con el equilibrio y la estructura de los procesos de industrialización textilera, en los que se debe tener en cuenta que la materia prima que se puede producir en

el país es apenas del 40%. Alrededor del 60% de las materias primas del sector (fibras, hilado y filamentos) son importadas, lo cual encarece los costos frente a países que cuentan con materia prima local. El aumento de aranceles no recae sobre el sector de los textiles, solo sobre las confecciones).

5.- Respecto de la política arancelaria, Colombia estableció los criterios generales de asignación de aranceles en la Reforma Estructural Arancelaria (REA) de noviembre de 2010, en el que, para el ámbito industrial se estableció que las materias primas y bienes de capital no producidos se les asigna un arancel de 0%; cubriendo aproximadamente 3,600 subpartidas arancelarias. Esto con el propósito de reducir costos de producción e impulsar la competitividad del sector productivo. El ámbito de aplicación se revisa anualmente de acuerdo con el Registro de Productores Nacionales. Las materias primas y bienes de capital con registro de producción nacional se les asigna un arancel de 5% ó 10% de acuerdo al grado de elaboración. Los bienes de consumo, independientemente de si tienen o no producción nacional, se les asigna un arancel de 15%. De este tratamiento general se excluyen al sector automotor (que tienen aranceles de 35%) y al sector de confecciones que tiene aranceles de 40% para precios inferiores o iguales a US\$10/Kg que abarca el grueso de la producción nacional.

VIII. INVIABILIDAD DE LA MEDIDA.

1.- En términos generales se prevé que dicha medida tendrá un gran impacto en el comercio y por ende en la economía. Adicionalmente, hay otros argumentos que demuestran que el incremento al arancel no es la solución para mejorar la competitividad del sector:

- a) Inflación: Se estima que los precios de las prendas incrementarán hasta en un 25% con un impacto potencial de hasta un 1 punto % en el índice de precios al consumidor.
- b) Afectación a los planes de expansión: Lo señalado anteriormente, generará una caída en las ventas del comercio formal afectando inevitablemente los planes de expansión de los comercios. En el pasado, otras empresas como Ripley, Gap, Banana y La Polar han decidido irse de Colombia porque no han visto en el país un mercado rentable.
- c) Contrabando: El contrabando tendrá un margen de cerca de 50% en precios (arancel, más IVA, más descuento del dólar callejero) por lo que se prevé un importante incremento de este negocio ilegal.
- d) Somos parte de la misma cadena: La inflación, el contrabando y la afectación al comercio formal, más que favorecer a la industria nacional terminarán afectándola dado que los principales comerciantes formales, son los mismos compradores de confección nacional. En estudios contratados por el gremio de comerciantes, se encontró que existe una correlación muy fuerte y positiva entre el comportamiento de las ventas formales del sector de confecciones y la producción nacional. Si se afecta el comercio formal (que en su mayoría también importa), se afecta directamente la manufactura.
- e) No se está atacando el problema: Las prendas que se importan por debajo de los 10US/KG y que son aquellos precios que están por debajo del costo de producción nacional, ya pagan 40% de arancel. Aquellas importaciones entre 10 y 20 US/Kg compiten con la producción nacional dentro de los mismos rangos de precio, teniendo en cuenta que, además del arancel, los importadores pagan flete más

seguro. Por otra parte, no existe producción nacional por encima de los 20US/KG por lo que no se entiende el porqué de aranceles por encima de dicho umbral.

- f) El comercio es un aporte importante a la economía del país: El nivel de informalidad de la industria de las confecciones es altísimo por lo que preocupa que se implementen medidas que afecten al comercio formal que genera empleo, paga impuestos y contribuye al control de la inflación.
- g) La ley no es el mecanismo para la modificación de aranceles. Cuando hay sospecha de dumping de un sector, los mecanismos de defensa comercial establecidos por la OMC son la salvaguarda y el antidumping. En este caso, se está ignorando por completo esta vía y se está acudiendo a vías inconstitucionales.

2.- Comercio Electrónico Cross Border.

El comercio electrónico que cruza fronteras (cross border) está creciendo exponencialmente. De ser casi inexistente hace unos años, hoy tiene un valor de US2.3 trillones que representa 11% del comercio mundial y se estima que para 2021 será el 35% del comercio mundial. (Ibarra, 2018). Por ejemplo, entre 2013 y 2016, las utilidades de Amazon crecieron en 57% mientras que para Alibaba crecieron en 61%.

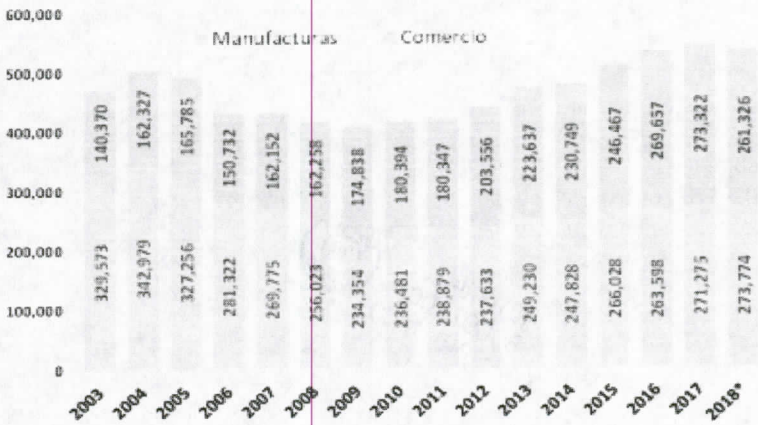
Bajo la modalidad de despacho final al cliente o de paqueteo, en donde en este último un tercero recoge, despacha, nacionaliza y entrega a domicilio en Colombia, hay un altísimo riesgo de afectación no sólo a la industria nacional sino al comercio formal. En el caso Colombiano, en virtud de los tratados de libre comercio vigentes, todo paquete por debajo de los 200 dólares que entra al país, está exento de arancel. Por ejemplo, las compras hechas con tarjeta de crédito en Colombia en 2016 fueron de un total aproximado de 150 millones de dólares.

Si a lo anterior se suma un eventual incremento de casi 23 puntos porcentuales de arancel a la importación de confecciones, se estaría dejando completamente expuesto al comercio formal por la imposibilidad de competir con el e-commerce internacional, además del contrabando. Es de tener en cuenta que ninguno de estos e-tailers (como lo son Amazon y Alibaba) entregan factura, por lo que son un coladero cada vez más grande que incentiva la informalidad.

IX. REFERENTES ECONÓMICOS DEL SECTOR TEXTÍL.

1.- Empleo manufactura y comercio de confección.

Los ocupados en manufacturas de prendas de vestir mostraron una tendencia decreciente hasta el 2012 la cual se revirtió levemente, mientras en comercio una marcada tendencia creciente durante todo el período hasta el 2018.



La conjunción de estas tendencias quiere decir que una discusión completa de los efectos del sector en la generación de empleos directos requiere necesariamente pensar en las actividades de comercialización.

Fuente: DANE, Encuesta Anual y Mensual Manufacturera y Encuesta Anual y Mensual de Comercio
(1) El año 2018 se estima usando la variación porcentual (dic18/dic17) reportadas por las encuestas mensuales manufactureras y de comercio
(2) Debido a la disponibilidad de la información el empleo en el segmento de comercio fue estimado en el 2018 con base en las variaciones de comercio minorista

El empleo generado por el comercio y la manufactura de confección ha sido históricamente similar. Por ejemplo, para 2018 los empleos generados por el comercio fueron de 261.326, cifra muy similar a los 273.774 empleos generados por la manufactura. Esta última cifra de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE contrasta con el 1.500.000 de empleos que aducen algunas personas vinculadas a este sector tener.

En este sentido, aun bajo una perspectiva optimista, es ilógico pensar que la medida va a proteger empleos en el total del sector en el mediano plazo, puesto que indiscutiblemente el aumento de los precios de los bienes importados tiene como consecuencia una reducción de puestos de trabajo en las actividades de comercialización de prendas por menores ventas por su encarecimiento y por la competencia del sector informal. Finalmente, vía el mayor incentivo al contrabando también reducirá los empleos en el sector industrial como se explica en el siguiente punto.

2.- La competitividad del sector no depende de excesivos niveles arancelarios.

Exportaciones de confecciones, participación en las exportaciones del sector Industrial y evolución del tipo de cambio. (Montos FOB en MM de USD\$)



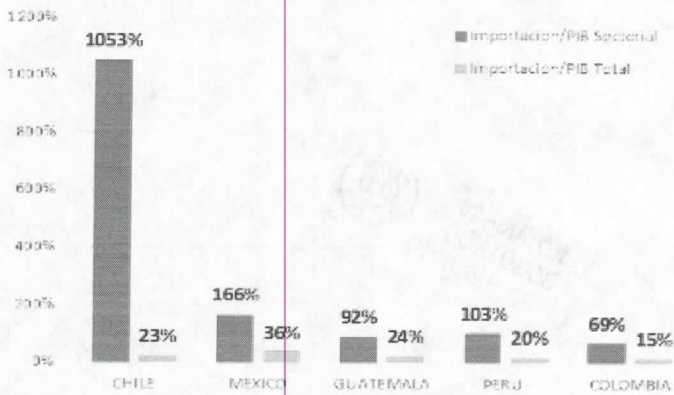
Fuente: DANE

Ni los altos aranceles (que alcanzaron cifras superiores al 500%) de marzo de 2013 a marzo 31 de 2014 con el Decreto 074 de 2013, y los aranceles superiores al 40% para importaciones cuyo precio FOB por Kg era igual o inferior a US10, que se mantuvieron hasta octubre de 2016, ni los aranceles superiores al 15% de las importaciones superiores a precios US10 KG, que se mantuvieron hasta octubre 31 de 2016 con la aplicación del Decreto 456 de 2014, mejoraron la competitividad del sector; tampoco los aranceles del 40% que hasta la fecha se mantiene para precios inferiores al precio US 10/ Kg. Las debilidades de la industria de confección son tan profundas, que ni siquiera los altos aranceles de 2013 a 2016, conjuntamente con la devaluación del 2015 y 2016 fueron suficientes para que mejoraran su desempeño exportador. Tampoco permitieron la conversión tecnológica requerida, ni el desarrollo de una cadena productiva horizontal y vertical que apoye el desarrollo del sector, acuñado con desarrollos de innovación, para hacer de este sector textil-confecciones, un polo de desarrollo industrial competitivo. Una vez más está demostrado que el uso de aranceles altos no es la solución, ni ayuda a que el sector pueda superar todas las deficiencias que adolece. Esto se soluciona con políticas de incentivos a la innovación, a la conversión tecnológica, como lo hizo en su momento China, no con impuestos que ingresan al erario público y no se revierten en beneficios al sector.

3.- Colombia es el país con menor penetración de importación de confección comparado con pares de Latinoamérica.

La industria textil-confección colombiana tiene un muy bajo nivel de competencia internacional en comparación con países de referencia de la región. Esto redunda en un ambiente de protección que favorece ineficiencias....

Importaciones como proporción del PIB sectorial (textil, confección, cuero y calzado) y nacional, 2017.

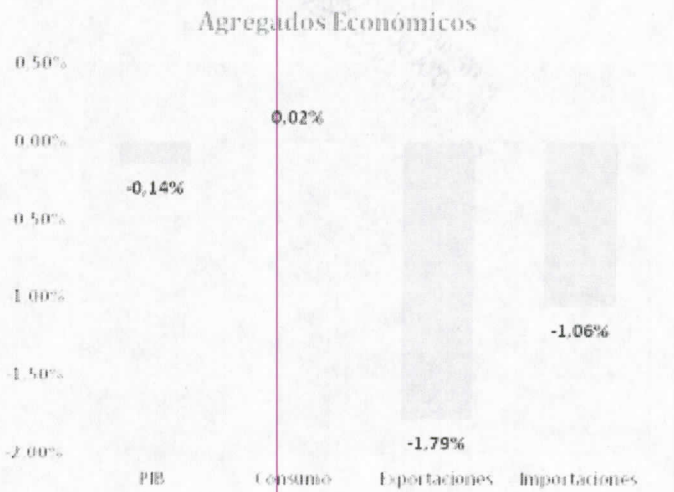


Fuente: PIB sectorial y total tomado de instituciones de estadísticas nacionales para cada país. Cuentas Nacionales de INEGI, INE, INEI, INEG, y DANE. Cifras de Importaciones y exportaciones tomadas de WITS.
Nota: Por motivos de comparabilidad entre países el sector incluye las actividades de la industria textil, prendas de vestir, cuero y calzado. Esto captura fabricación de insumos textiles –hilatura-, fabricación de material textil, confección, preparación de pieles y curtidos y fabricación de calzado. Para guardar consistencia con las cifras de PIB, las exportaciones e importaciones tenidas en cuenta en este cálculo abarcan los capítulos 41, 42, 43, y el intervalo cerrado del 50 al 65 en nomenclatura HS 2012.

En Colombia hay menos competencia internacional: Colombia es el país con menor penetración de importación de confección como proporción del PIB sectorial en comparación con otros países de la región de condiciones similares, pues los niveles arancelarios vigentes hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo eran razonables para proteger al sector sin promover la informalidad y el contrabando.

4.- Impactos macroeconómicos.

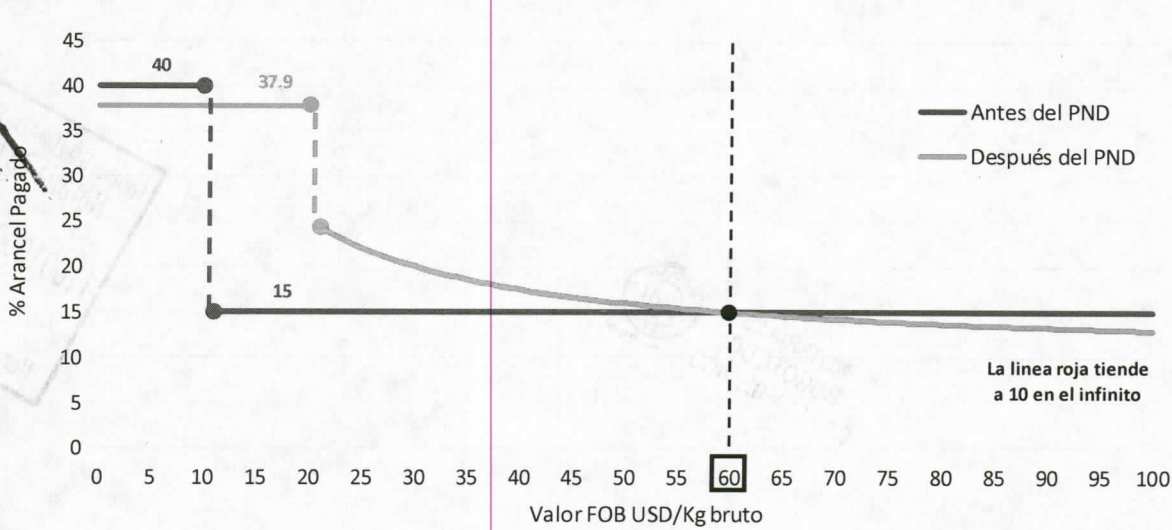
Efectos del Arancel 37% en Textiles sobre los Agregados Económicos DNP



Otros efectos macroeconómicos: Una subida de aranceles como la que se plantea, traería unos efectos colaterales muy importantes para la economía como son la contracción del PIB, una reducción del consumo, la afectación al desempeño exportador del sector y

afectará las proyecciones de disminución de pobreza de acuerdo con los cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP)

5.- El esquema de cobros arancelario propuesto es inequitativo y afecta a los más pobres.



La introducción de un cobro ad valorem de 3 dólares por kilogramo importado en adición a un pago del 10% del valor por kilogramo declarado, introduce un claro sesgo que hace que entre más costoso sea el bien importado, la proporción de los aranceles pagados sea menor. Para ilustrarlo, basta con notar que una prenda que valga 20 dólares el kilogramo terminaría pagando un total de 2 dólares por concepto del arancel del 10% mas una contribución fija de 3 dólares para un total de 5 dólares que corresponden a un pago total del 25% del valor declarado; mientras que una prenda lujosa de 100 dólares el kilogramo pagaría 10 dólares por concepto del arancel del 10% más una contribución fija de 3 dólares para un total de 13 dólares que corresponden a un pago total del 13% del valor declarado.

Así las cosas, es evidente que la medida es desproporcionada, afectando de forma mucho más severa a los bienes de menor costo, y por lo tanto, presumiblemente a la población de menores ingresos, introduciendo distorsiones que contribuirán a ampliar la desigualdad en la capacidad adquisitiva de los más pobres y en la distribución del ingreso.

6.- Las medidas propuestas no contribuyen de ninguna manera a solucionar el principal problema del sector: el contrabando abierto.

De hecho, exacerban la problemática ampliando los incentivos para la actividad ilegal. Entre más elevado sea el costo de los aranceles a pagar para hacer una importación legal, más incentivos se generan para que los contrabandistas aumenten el volumen de su actividad.

Esto se explica porque si aumentan los aranceles, aumenta la diferencia en el costo de la operación legal vs la ilegal, dando así una mayor ventaja competitiva a las actividades de contrabando producto de la competencia desleal entre las firmas que pagan los aranceles (cada vez más elevadas) y los agentes que operan por fuera de la ley.

Por lo tanto, la medida es nociva en la medida en que terminará forzando a los agentes legales a asumir costos elevados, mientras que estos se enfrentan a una mayor competencia ilegal que ingresa vía contrabando, trayendo como consecuencia una afectación importante tanto para la industria doméstica como para la de comercialización de bienes legalmente importados.

X. COMPETENCIA.

La Corte Constitucional es competente para conocer de esta acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con el numeral 4o del artículo 241 de la Constitución Política. La norma que se demanda tiene fuerza de ley, desde el punto de vista material y formal, puesto que fue expedida por el Congreso Nacional.

XI. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.

La presente acción cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991:

- 1.- La demanda define con precisión el objeto demandado, pues se transcriben las normas demandadas.
- 2.- Explica las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente para conocer de esta acción.
- 3.- Indica de manera clara y detallada las razones en las que se fundamenta la inconstitucionalidad de la norma, pues se señalan los artículos de la Constitución violados y se explican cada uno de los cargos.

XII. PETICIÓN.

Por todas las razones expuestas en este escrito, solicito de manera respetuosa a la Honorable Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de las normas demandadas, artículo 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".

XIII. ANEXOS.

- 1.- Poder especial debidamente otorgado por la Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO y el correspondiente certificado de existencia y representación.

XIV. NOTIFICACIONES.

A la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO, en la Carrera 4 No. 19-85 Piso 7 de Bogotá D.C.

Al suscrito en la Calle 72 No. 9- 55, oficina 803, de Bogotá D. C. Dirección electrónica: jcharry@charrymosquera.com.co

De los Honorables Magistrados,


JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA

C. C. N° 79°147.236 de Usaquén

T. P. N° 33.683

Fernando Téllez Lombana - Notario Público 28 en Propiedad & en Carrera de Bogotá D.C.
DILIGENCIA DE TESTIMONIO AUTENTICIDAD DE PRESENTACIÓN Y DE FIRMA
El Notario Público doy testimonio que la firma y/o huella puesta en este documento
presentado ante este despacho en esta fecha guarda (n) similitud a la de la persona
que se presentó personalmente ante este despacho y que la registro en fecha anterior,
que previamente se ha dado la confrontación de las mismas con las que aparecen
en el archivo de la notaría y el documento a la vista:
Identificado con: MANUEL CARRANZA OLIVERA
No equivale a reconocimiento tiene el valor de testimonio fidedigno y no confiere
al documento mayor fuerza de la que por sí tenga. 1100100028

TPJ 33683 CS)

Fernando Téllez Lombana Notario Público 28 en Propiedad & en Carrera de Bogotá D.C.
Notaría 28 del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
1100100028 04 JUN. 2019 COD. 4112
FERNANDO TÉLLEZ LOMBANA
Notario Público 28 en Propiedad & en Carrera de Bogotá D.C.

44

CHARRY MOSQUERA ABOGADOS ASOCIADOS & Cía. S. A. S.

Juan Manuel Charry Urueña
Calle 72 No. 9-55, Oficina 803
Teléfonos (571) 3128500/900
Bogotá D. C. – Colombia
www.charrymosquera.com.co
jcharry@charrymosquera.com.co



Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
(REPARTO)
E. S. D.

Referencia: Demanda inconstitucionalidad artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

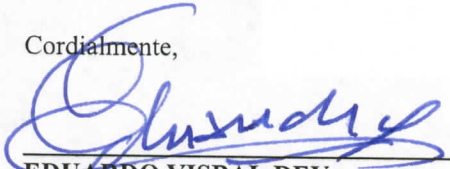
Demandante: Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO

Asunto: Poder Especial


EDUARDO VISBAL REY, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número 9.089.368 de Cartagena, actuando en nombre y representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES – FENALCO, de conformidad a las facultades a mí conferidas, manifiesto que, mediante el presente escrito, otorgo poder especial, amplio y suficiente al Doctor **JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA**, abogado titulado, identificado con cédula de ciudadanía número 79.147.236 de Usaquén, con tarjeta profesional número 33.683 del Consejo Superior de la Judicatura, para que presente la **DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD** contra los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019 y adelante todas las actuaciones procesales tendientes a adelantar la demanda de inconstitucionalidad, hasta su culminación.

El apoderado queda ampliamente facultado para promover las acciones, notificarse, presentar memoriales, interponer recursos, pedir pruebas, solicitar copias, recibir, desistir, transigir, conciliar, sustituir y las demás establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso; y en general, adelantar todos los actos y gestiones necesarios para el fiel cumplimiento del mandato conferido.

Cordialmente,


EDUARDO VISBAL REY
C.C. 9.089.368 de Cartagena.

Acepto,


JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA
C.C. 79.147.236 de Usaquén
T.P. 33.683 del Consejo Superior de la Judicatura

NP

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En la ciudad de Bogotá D.C. a 30 de Mayo de 2019

Compareció ante la Notaria Primera del Circulo de Bogotá

Eduardo Visbal Rey

Quien se identificó con la cédula de ciudadanía

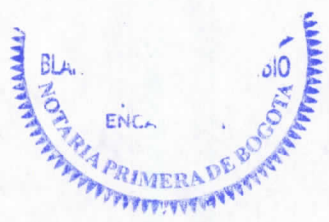
Número 9 089 368

Expedida en Catagena

y Declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto

El declarante, [Firma]

[Huella]





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19604662DD3A6

4 DE JUNIO DE 2019

HORA 11:15:31

AA19604662

PÁGINA: 1 DE 5

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS" /

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO : FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO
INSCRIPCION NO: S0003109 DEL 31 DE MARZO DE 1997

N.I.T. : 860013488-7

TIPO ENTIDAD : OTRAS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ENTIDADES

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS ARTICULOS 43 Y 144 DEL DECRETO NUMERO 2150 DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA INSCRIPCION : 12 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2019

ACTIVO TOTAL : 12,163,290,000

PATRIMONIO : 0

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 4 NO. 19 85 PSO 7

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : FENALCO@FENALCO.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CRA. 4 NO. 19-85 PSO. 7°

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : FERNANDOMUNOZ@FENALCO.COM.CO

FAX : 3506527

CERTIFICA:

QUE POR CERTIFICACION DEL 27 DE FEBRERO DE 1997 , OTORGADO(A) EN ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA , INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 1997 BAJO EL NUMERO: 00003336 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE INSCRITA LA ENTIDAD DENOMINADA: FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO

CERTIFICA:

QUE DICHA ENTIDAD OBTUVO SU PERSONERIA JURIDICA NUMERO : 368 EL 27 DE

AGOSTO DE 1945, OTORGADA POR: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

CERTIFICA:

ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
000165A	2000/11/01	CONGRESO NACIONAL	2005/06/02	00086124
0000165	2000/11/01	CONGRESO NACIONAL	2005/06/23	00087022
0000200	2004/10/28	CONGRESO NACIONAL	2005/06/23	00087025
0000210	2005/09/23	CONGRESO NACIONAL	2005/10/10	00090584
0000243	2008/08/22	CONGRESO NACIONAL	2008/09/24	00143357
254	2009/08/20	CONGRESO	2009/10/05	00162073
266	2010/09/09	CONGRESO NACIONAL	2010/09/21	00179646
296	2013/09/06	CONGRESO NACIONAL	2013/09/23	00230354
326	2016/09/14	CONGRESO NACIONAL	2016/10/20	00267877
326	2016/09/14	CONGRESO NACIONAL	2016/10/24	00268010
326	2016/09/14	ASAMBLEA GENERAL	2018/06/19	00306188
334	2017/09/13	CONGRESO NACIONAL	2017/11/22	00297128
343	2018/09/12	CONGRESO NACIONAL	2018/12/05	00311364

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA ENTIDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO : LOS FINES PRINCIPALES DE LA FEDERACION SON LOS SIGUIENTES : A) AFIANZAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA PRIVADA EN GENERAL Y DEL COMERCIO EN PARTICULAR COMO NECESIDAD NACIONAL QUE PROPICIA EL DESARROLLO; B) COLABORAR CON EL ESTADO EN LA FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS Y MEDIDAS QUE PROCUREN EL FOMENTO ECONOMICO Y SOCIAL, PREFERENCIALMENTE EN AQUELLAS QUE TENGAN RELACION CON EL COMERCIO; C) VELAR POR LA PROTECCION EQUITATIVA DE LOS INTERESES DEL COMERCIO Y POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS POR PARTE DEL ESTADO Y DEMAS SECTORES ECONOMICOS; D) MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, PUBLICAS O PRIVADAS, QUE SE OCUPEN DE PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES, ESPECIALMENTE DE ASUNTOS MERCANTILES Y, CUANDO SEA DEL CASO, REALIZAR CON ELLAS CAMPAÑAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS CONJUNTOS; E) PROCURAR LA ADOPCION Y ADECUADA INTERPRETACION DE LAS DISPOSICIONES QUE REGLAMENTEN LA ACTIVIDAD ECONOMICA, PREFERENCIALMENTE AQUELLAS QUE ATAÑEN AL EJERCICIO DEL COMERCIO INTERNO Y EXTERNO, DE TAL MANERA QUE SEAN DEBIDA Y JUSTAMENTE TUTELADOS LOS LEGITIMOS INTERESES DE PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES; T) DEFENDER LA LIBERTAD DE EMPRESA Y DE COMPETENCIA Y LA INICIATIVA PRIVADA COMO CRITERIOS PROPICIOS PARA EL PROGRESO ORDENADO DE LA NACION Y EL ROBUSTECIMIENTO DE LA ECONOMIA, DE LA CUAL ES PARTE LA ACTIVIDAD MERCANTIL, SIEMPRE DENTRO DEL MARCO DEL BIEN COMUN; G) PRESTAR SU CONCURSO PARA ASEGURAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA Y SEGURIDAD COMO CONDICION BASICA PARA EL DESARROLLO DEL PAIS Y DEL COMERCIO; H) COORDINAR CON LOS ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS PERTINENTES LA FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS COMERCIALES, ELEVANDO SU NIVEL CULTURAL, TECNICO Y ECONOMICO; I) ESTIMULAR EL ESTUDIO DE TODAS AQUELLAS CIENCIAS Y TECNICAS CUYO CONOCIMIENTO PERFECCIONE AL COMERCIANTE Y A SUS COLABORADORES, PARA CUMPLIR MAS EFICIENTEMENTE SU FUNCION DE DISTRIBUCION; J) PROMOVER DENTRO DEL COMERCIO EL ESPIRITU DE SOLIDARIDAD GREMIAL Y VELAR POR EL EJERCICIO HONESTO DEL MISMO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19604662DD3A6

4 DE JUNIO DE 2019

HORA 11:15:31

AA19604662

PÁGINA: 2 DE 5

* * * * *

DENTRO DE ALTAS NORMAS DE CARACTER ETICO; K) FOMENTAR UNA JUSTA IMAGEN DEL COMERCIANTE Y DE SU AGREMIACION, CON MIRAS A ASEGURAR LA DEBIDA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL Y EL CLIMA MAS FAVORABLE PARA SU DESENVOLVIMIENTO; 1) ASESORAR A LOS AFILIADOS EN AQUELLAS CUESTIONES QUE TENGAN RELACION CON SU ACTIVIDAD PROFESIONAL, Y SUMINISTRARLES SERVICIOS, ASI COMO ORIENTACION E INFORMACION SOBRE TODOS AQUELLOS ASUNTOS QUE LE SIRVAN PARA DESEMPEÑARSE MEJOR. EN DESARROLLO DE LO ANTERIOR, ENTRE OTRAS, PODRA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CAPTURA, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO, ADMINISTRACION, VALIDACION, TRANSFORMACION Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SISTEMATIZADA DE INFORMACION, INCLUYENDO LA PERTINENTE PARA EFECTUAR ESTUDIOS DE CREDITO, DE EMPLEO, UBICACION GEOGRAFICA, REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON FINCA RAIZ ., CAPTACION DE CARTERAS MOROSAS, COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, Y EN GENERAL, QUE VERSEN SOBRE ASUNTOS DE UTILIDAD PARA EL COMERCIO. ASI MISMO PODRA GIRAR, NEGOCIAR, CUSTODIAR, COMPRAR, VENDER, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR, Y/O AVALAR Y EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES O CUALESQUIER OTROS EFECTOS DE COMERCIO; GARANTIZAR, RESPALDAR Y AFIANZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS, Y EN GENERAL TODA CLASE DE TRANSACCIONES COMERCIALES, EXCLUYENDO LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. ASI MISMO PODRIA PROPICIAR Y REALIZAR POR SU CONDUCTO LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AFILIACION COLECTIVA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL REGIMEN CONTRIBUTIVO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. PARA TALES EFECTOS PODRIA CONSTITUIR GARANTIAS DE PAGO DE LOS APORTES, PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. LL) EJERCER EL DERECHO DE PETICION ANTE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEL ESTADO, Y SOLICITAR DE ELLOS LA EXPEDICION, MODIFICACION O DEROGATORIA DE LAS DISPOSICIONES Y MEDIDAS SEGUN SEA EL CASO, RELACIONADAS CON EL COMERCIO, Y LA EMPRESA PRIVADA CUYO FOMENTO SE PERSIGUE; M) ESTIMULAR LA ADOPCION Y MANTENIMIENTO DE UNA POLITICA DE JUSTICIA SOCIAL BASADA EN LAS REALIDADES Y NECESIDADES NACIONALES; N) VELAR PORQUE EL COMERCIO CUMPLA LA FUNCION SOCIAL QUE LE ES INHERENTE Y ACTUAR COMO SU REPRESENTANTE CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS ASI LO EXIJAN; Ñ) AGRUPAR EN SU SENO A LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES COMERCIALES CON CARACTER PROFESIONAL Y ORGANIZADO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LOS ORGANOS DIRECTIVOS A NIVEL NACIONAL Y SECCIONAL; O) POR SER LA FEDERACION UNA ENTIDAD DE NATURALEZA CIVICA CONFORMADA POR CONSUMIDORES, ACTUARA . COMO ASOCIACION O LIGA DE CONSUMIDORES O DE USUARIOS, PARA ASI DEFENDER SUS DERECHOS; IGUALMENTE ACTUARA COMO REPRESENTANTE Y VOCERA DE LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ANTE LAS EMPRESAS QUE LOS PRESTAN O ANTE OTRAS ENTIDADES DE CONFORMIDAD CON LAS

24

NORMAS LEGALES SOBRE LA MATERIA. PARA CUMPLIR ESTOS OBJETIVOS FENALCO PRESTARÁ SU COOPERACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS Y A LAS ENTIDADES Y EMPRESAS CORRESPONDIENTES; P) PROMOVER Y ORGANIZAR CONGRESOS, CONVENCIONES, ASAMBLEAS, SEMINARIOS, FERIAS, MARTILLOS, REMATES Y DEMÁS EVENTOS QUE PERSIGAN EL DESARROLLO Y/O EL APOYO A LA CULTURA, EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O LA INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COLOMBIANOS; Q) HACER PARTE DE ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS O INSTITUCIONES QUE COADYUVEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS ESTATUTOS; R) PROMOCIONAR LA AGREMIACIÓN DE NUEVOS AFILIADOS; S) ORIENTAR, REPRESENTAR, COORDINAR Y DEFENDER LOS INTERESES DEL COMERCIO NACIONAL Y REGIONAL, ANTE LAS AUTORIDADES, OTRAS ENTIDADES GREMIALES Y DEMÁS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD DE CARÁCTER OFICIAL, SEMIOFICIAL Y PARTICULAR, CON EL OBJETO DE BUSCAR UNA SANA CONCILIACIÓN DE INTERESES, CON LOS DEMÁS SECTORES DE LA ACTIVIDAD CIUDADANA, Y T) EN GENERAL, TOMAR LAS DETERMINACIONES Y ADELANTAR TODAS LAS CAMPAÑAS QUE REQUIERAN LA CONVENIENCIA Y PROSPERIDAD DEL COMERCIO COLOMBIANO, EL DESARROLLO DE LA FEDERACIÓN Y EL BIEN COMUN.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

9499 (ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.)

CERTIFICA:

JUNTA DIRECTIVA

QUE POR ACTA NO. 244 DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 24 DE AGOSTO DE 2011, BAJO EL NO. 00196258 DEL LIBRO I, DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE NOMBRADA:

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

MIEMBRO HONORARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

JALUF DE CASTRO ROSA

C.C.0000000038442763

QUE POR ACTA NO. 306 DEL CONGRESO NACIONAL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, BAJO EL NO. 00244785 DEL LIBRO I, DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUERON NOMBRADOS:

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

DUPERLY ARANGO OSCAR

C.C.000000008284193

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

MONTOYA FRANCO HERNAN

C.C.000000002929407

QUE POR ACTA NO. 343 DEL CONGRESO NACIONAL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018, BAJO EL NO. 00311365 DEL LIBRO I, DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 FUERON NOMBRADOS.

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

JARAMILLO ZULUAGA CARLOS ESTEBAN

C.C.0000000070566226

EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

RESTREPO VELEZ JUAN CARLOS

C.C.0000000098550134

EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

MADERO CABRERA RAFAEL ALFREDO

C.C.000000007467966

EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL ATLÁNTICO

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

VISBAL GALOFRE GUSTAVO ENRIQUE

C.C.000000007468086

EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL ATLÁNTICO

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

LINCE CALLE HORACIO

C.C.000000008251181



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19604662DD3A6

4 DE JUNIO DE 2019 HORA 11:15:31

AA19604662

PÁGINA: 3 DE 5

* * * * *

EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
MEJIA GODOY JESUS HERNANDO C.C.0000000016782664
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
MARUN MEYER PEDRO ALEJANDRO C.C.0000000019237446
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
QUINTERO GOMEZ OCTAVIO DE JESUS C.C.0000000016623523
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL VALLE
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
AYALA VINCENZINI LUIS ENRIQUE C.C.0000000016820836
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL VALLE
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
BOTERO MACHADO ADOLFO C.C.0000000019389134
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL SANTANDER
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
VELASCO MUÑOZ LUIS ENRIQUE C.C.0000000079148360
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL CALDAS
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
GEDEON JUAN CARLOS FERNANDO C.C.0000000073100412
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL BOLIVAR
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
GUTIERREZ CRUZ CARLOS ROBERTO C.C.0000000019122946
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL HUILA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
JARAMILLO BEDOYA LUIS FERNANDO C.C.0000000010082441
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL RISARALDA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
DIAZ CORTES DIANA YANETH C.C.0000000065761774
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL TOLIMA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
GARCIA ACEVEDO GABRIEL FRANCISCO C.C.0000000017146241
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
PRIETO DAZA HARBY ALFREDO C.C.0000000086041623
EN REPRESENTACIÓN DE FENALCO SECCIONAL META

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 , BAJO EL NO. 00311368 DEL LIBRO I, DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO MARUN MEYER PEDRO ALEJANDRO RENUNCIÓ AL CARGO DE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ENTIDAD, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL PRESIDENTE NACIONAL DE LA FEDERACIÓN SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL. SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD NACIONAL Y A SU CARGO ESTARÁ LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MISMA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL REEMPLAZARA AL PRESIDENTE NACIONAL DE LA FEDERACIÓN EN SUS FALTAS TEMPORALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000188 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00066659 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION

PRESIDENTE

BOTERO NIETO LORENZO GUILLERMO

C.C. 000000019063823

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 02 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITO EL 6 DE AGOSTO DE 2018, BAJO EL NO. 00307836 DEL LIBRO I, DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BOTERO NIETO LORENZO GUILLERMO RENUNCIÓ AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ADEMÁS DE LAS INDICADAS EN OTRAS DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS, LAS SIGUIENTES: A) LLEVAR LA REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y EJERCER SU VOCERÍA ANTE TODAS LAS ENTIDADES O PERSONAS DE CARÁCTER OFICIAL O PARTICULAR NACIONALES O EXTRANJERAS; B) EMITIR CONCEPTO A LA JUNTA SECCIONAL O COMITÉ EJECUTIVO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LA ELECCIÓN Y REMOCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO, QUIEN NO PODRÁ POSESIONARSE SINO PREVIA INDUCCIÓN DADA POR LA PRESIDENCIA NACIONAL. IGUALMENTE CUMPLIRÁ CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LOS PRESENTES ESTATUTOS; C) CONSTITUIR LOS APODERADOS QUE, OBRANDO BAJO SUS INSTRUCCIONES, SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA FEDERACIÓN Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE JUZGUE CONVENIENTES CON LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL; D) DIRIGIR LA ACCIÓN DE LA PRESIDENCIA NACIONAL DE ACUERDO CON LAS PAUTAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS FIJADOS POR EL CONGRESO NACIONAL Y LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL; E) NOMBRAR Y REMOVER LOS DIRECTIVOS DE LA PRESIDENCIA NACIONAL, A EXCEPCIÓN DE LOS QUE SE RESERVE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, Y DETERMINAR SU REMUNERACIÓN, DENTRO DE LA ESCALA GENERAL DE SALARIOS FIJADOS POR ÉSTA; F) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS DEMÁS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA NACIONAL Y DETERMINAR SUS SALARIOS DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL; G) CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y ORDENAR GASTOS HASTA EL LÍMITE PREVISTO EN EL LITERAL N) DEL ARTÍCULO 19; H) VELAR POR LA CUMPLIDA RECAUDACIÓN DE LAS CUOTAS CON QUE LAS ENTIDADES REGIONALES DEBEN CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL. EN EJERCICIO DE ESTA FUNCIÓN EL PRESIDENTE PODRÁ, DIRECTAMENTE O POR INTERMEDIO DE UN FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA NACIONAL, REVISAR LOS DOCUMENTOS Y LIBROS DE CARÁCTER CONTABLE QUE ESTIME CONVENIENTE; I) DESIGNAR SUS REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS REGIONALES Y LOS DE LA FEDERACIÓN ANTE OTRAS ENTIDADES; J) VIGILAR LA MARCHA DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES PARA LO CUAL PODRÁ SOLICITARLES LOS INFORMES FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES; K) HACER CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL; L) PRESENTAR A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS; LL) ESTABLECER LA

CONTRIBUCIÓN A LAS SECCIONALES SEDES DE LOS CONGRESOS; M) EJECUTAR LAS POLÍTICAS Y DECISIONES DE LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS Y VELAR POR SU CUMPLIMIENTO; N) ASIGNAR TAREAS ESPECIALES A LOS DIRECTORES SECCIONALES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL O POR DECISIONES ADOPTADAS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA; Ñ) VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN; O) ASISTIR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE ALGUNO DE SUS REPRESENTANTES, POR DERECHO PROPIO CON VOZ Y VOTO, A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS SECCIONALES O A LOS COMITÉS DIRECTIVOS DE LOS CAPÍTULOS QUE CONSIDERE NECESARIO. IGUALMENTE, PODRÁ CONVOCAR, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS CALIFICADAS POR LA JUNTA NACIONAL LO AMERITEN, REUNIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS O ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE LAS SECCIONALES Y CAPÍTULOS. LA FACULTAD DE CONVOCAR A LA JUNTA SE HARÁ EXTENSIVA PARA EFECTOS DE QUE SE ESTUDIE: A) LA REMOCIÓN DEL DIRECTOR, B) LA ABSORCIÓN DEL CAPÍTULO POR PARTE DE LA SECCIONAL DE SU JURISDICCIÓN O DE LA MÁS CERCANA, BAJO EL SUPUESTO DEL PARÁGRAFO DEL LITERAL J) DEL ARTÍCULO 19; O C) LA LIQUIDACIÓN DEL CAPÍTULO POR PARTE DE LA PRESIDENCIA, CUANDO NO SEA POSIBLE LA MENCIONADA ABSORCIÓN POR PARTE DE LA SECCIONAL. FINALMENTE, PODRÁ PROPONER A LA ASAMBLEA GENERAL, LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL. CUANDO EL PRESIDENTE ASISTA A LAS REUNIONES DE JUNTA O ASAMBLEA DE LAS SECCIONALES O CAPÍTULOS CONVOCADAS POR ÉL, LAS PRESIDIRÁ Y NOMBRARÁ AL SECRETARIO DE LA SESIÓN; Y P) LAS DEMÁS PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS O QUE LE ASIGNE EL CONGRESO NACIONAL O LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1372 DE LA NOTARÍA 41 DE BOGOTÁ D.C., DEL 27 DE JULIO DE 2018, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2018 BAJO EL REGISTRO NO 00307673 DEL LIBRO I COMPARECIÓ LORENZO GUILLERMO BOTERO NIETO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.063.823 DE BOGOTÁ D.C., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, DE MANERA INDEPENDIENTE, A LOS DOCTORES MARÍA JOSÉ RAMÍREZ SEPÚLVEDA IDENTIFICADA CON CÉDULA CIUDADANÍA NO. 28.964.044 DE SUÁREZ (TOLIMA), Y A EDUARDO ANTONIO VISBAL REY IDENTIFICADO CON CÉDULA CIUDADANÍA NO. 9.089.368 DE CARTAGENA, PARA QUE EN CUALQUIER ORDEN Y SIN CONSIDERACIÓN A LA CUANTÍA Y CALIDAD LO REPRESENTE LEGAL, JURÍDICA, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, SEA POR ACTIVA O POR PASIVA EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON SUS DERECHOS REALES Y PERSONALES, DEBERES Y OBLIGACIONES, ASÍ COMO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES, COMERCIALES, PENALES Y LABORALES. ESTE PODER GENERAL, EN TODOS LOS CASOS Y PARA TODOS LOS EFECTOS PARA LOS QUE FUE OTORGADO, SE CONFIERE CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL, CONFORME A LA LEY, POR LO CUAL SE ENTIENDE CONCEDIDO SIN LIMITACIÓN O RESTRICCIÓN ALGUNA, NO SÓLO PARA LO

84

EXPRESAMENTE PREVISTO SINO PARA TODAS LAS DILIGENCIAS, GESTIONES, ACTUACIONES, INTERVENCIONES, REPRESENTACIONES, ETC., ANEXAS Y/ CONEXAS, Y/O COMPLEMENTARIAS, CON CAPACIDAD PARA RECIBIR, DESISTIR, SUSTITUIR, TRANSIGIR, CANCELAR, RECURRIR, INTERVENIR, EXCEPCIONAR, DEMANDAR, CONCILIAR, LITIGAR, PEDIR, REQUERIR, RECUSAR, RECONVENIR, ABSOLVER, REVOCAR PODERES PUDIENDO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES QUE MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO SE LE OTORGAN, LAS CUALES PUEDE REASUMIR O REVOCAR EN CUALQUIER MOMENTO. IGUALMENTE, ESTE PODER CONFIERE A LOS APODERADOS PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE PUEDAN REPRESENTAR A FENALCO EN LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, Y ADELANTE CUMPLAN TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS NECESARIOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS. PARÁGRAFO: LAS ENUMERACIONES REALIZADAS ANTERIORMENTE A LO LARGO DE LA PRESENTE CLÁUSULA PRIMERA NO SON MERAMENTE TAXATIVAS NI RESTRICTIVAS, SINO A MODO DE EJEMPLO, LO CUAL INDICA QUE LOS APODERADOS PODRÁN EJERCER CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO Y DISPOSITIVO SIN LIMITACIÓN ALGUNA. VIGENCIA: EL PRESENTE PODER TENDRÁ VIGENCIA DE INDEFINIDO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA.

CERTIFICA:

** REVISORIA FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 343 DE CONGRESO NACIONAL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 00311366 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS

N.I.T. 000008002301877

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 00311367 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

BAQUERO VILLALBA MANUEL ALEJANDRO

C.C. 000000079955261

REVISOR FISCAL SUPLENTE

QUIÑONES CORTES ROBERTO ANTONIO

C.C. 000000019418336

CERTIFICA:

QUE EN ESTA CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES POSTERIORES DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION LIQUIDACION O NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENCIONADA ENTIDAD.

CERTIFICA:

EL REGISTRO ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE APROBACION DE ESTATUTOS. (DECRETO 2150 DE 1995 Y DECRETO 427 DE 1996).

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA DISTANCIA CUANDO EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE ALLEGARA COPIA DE LOS ESTATUTOS.

TODA AUTORIZACION, PERMISO, LICENCIA O RECONOCIMIENTO DE CARACTER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19604662DD3A6

4 DE JUNIO DE 2019

HORA 11:15:31

AA19604662

PÁGINA: 5 DE 5

* * * * *

OFICIAL, SE TRAMITARA CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 5,800

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



ARAÚJO IBARRA

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Incompatibilidades Artículos XX y XX del proyecto de Ley que “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, frente a los compromisos y obligaciones de Colombia en virtud de los Acuerdos Comerciales Vigentes

- Los Artículos 274 y 275 del PND, establecen dos nuevos niveles arancelarios, según el precio de la mercancía, para **las importaciones** de los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas, sin especificar si se trata de nuevos aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) y sin mencionar el tratamiento a las importaciones originarias de los países con los cuáles están vigentes Acuerdos Comerciales. Los artículos tal como están redactados, establecerían entonces nuevos aranceles, incluso para las importaciones de confecciones originarias de países con los que tenemos Acuerdos Comerciales vigentes:

“ARTÍCULO 274°. ARANCEL A LAS IMPORTACIONES. Se establecerá un arancel de treinta y siete punto nueve por ciento (37.9%) a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto.

ARTÍCULO 275°. ARANCEL DE ADUANAS NACIONALES. Se establecerá un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares USD, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional.”

- De mantenerse este texto tal como fue incorporado en el PND, significaría una abierta vulneración de los compromisos adquiridos por Colombia con nuestros socios comerciales, que sin duda darían origen al inicio de reclamaciones en el marco de las disposiciones de Solución de Controversias. Dichas reclamaciones podrán derivar en retaliaciones para Colombia en productos de otros sectores, que son actualmente exportados a dichos destinos.
- En particular, las disposiciones frente a las cuales se observa clara incompatibilidad son las siguientes:

1. Eliminación arancelaria



ARAÚJO IBARRA

CONSEJO DE POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL

Los capítulos de Trato Nacional y Acceso a Mercados pactados en los diferentes Acuerdos Comerciales, establecen que ninguna Parte signataria del Acuerdo, podrá incrementar unilateralmente un arancel aduanero vigente, o adoptar un arancel aduanero nuevo sobre una mercancía originaria.

Se establece además un listado detallado con el cronograma de desgravación de las mercancías cubiertas por el Acuerdo Comercial, en el que se especifica claramente la reducción arancelaria acordada.

Así mismo, hay que tener en cuenta que estos cronogramas de desgravación se establecen bajo el concepto de "Arancel Base", es decir la tasa aduanera aplicada en el momento que se realizó la negociación comercial y fija el punto de partida del proceso de desmonte arancelario. En el caso del sector confecciones, este "Arancel Base" se estableció en un nivel de 15%, de manera que fijar un arancel superior, significaría incluso reabrir las negociaciones comerciales, por cuanto se estarían modificando uno de los pilares fundamentales sobre los que se basan este tipo de Acuerdos.

2. Medidas de Salvaguardia

La mayoría de los Acuerdos Comerciales vigentes establecen clausulas de salvaguardia bilateral, para hacer frente a situaciones en las que una rama de producción nacional, presente un daño importante por causa del desmonte arancelario. Esta excepción que prevista en los Acuerdos, permite suspender temporalmente la desgravación arancelaria o incrementar aranceles también temporalmente, **pero hasta el nivel del "Arancel Base" pactado y en ningún caso, por encima de esta tarifa, como lo está planteando el PND.**

Así mismo, para aplicar una medida de salvaguardia bilateral se requiere adelantar un riguroso proceso de investigación por parte del Ministerio de Comercio, que en el caso de las confecciones no se ha surtido.

Para el evento y en situaciones excepcionales en los que sea necesario incrementar los aranceles incluso por encima de los niveles consolidados de la OMC (40% en el caso de las confecciones), se mantienen vigentes las disposiciones de la OMC en materia de Salvaguardia General, Derechos Antidumping o Derechos Compensatorios. Sin embargo, en este caso, el estándar probatorio es mucho más alto y de nuevo se exige un riguroso proceso de investigación, con participación abierta de los exportadores e importadores afectados, que en el caso del PND no se surtió.

3. Excepciones generales

WWW.ARAUJOIBARRA.COM

Bogotá Calle 98 # 22-64, Of. 910 · Edificio Calle 100 · Tel: 6511511
Barranquilla Calle 77B # 57-141, Of. 211 · Edificio Centro Empresarial Las Américas I · Tel: 5-3690866
Cali Calle 11 # 100-121, Of. 1001 · Edificio Campestre Towers · Tel: 2-3747044 / 2-4837614



ARAÚJO IBARRA

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Tanto en el marco de la OMC (cap XX del GATT) como en los Acuerdos Comerciales vigentes, se prevén cláusulas que permiten a un país realizar una excepción a las disposiciones negociadas, cuando existe una amenaza seria de la seguridad nacional, o cuando esté en riesgo la moral pública, o la vida de los ciudadanos. En estos eventos se permite, suspender la desgravación arancelaria o incrementar los aranceles; sin embargo se trata de una disposición que sólo puede activarse en casos muy extremos, en los que se demuestre claramente dichos requisitos. De nuevo, para el caso de los aranceles del PND no puede argumentarse esta situación.

4. Acciones que pueden emprender nuestros socios comerciales de adoptarse los aranceles establecidos en el PND

Las disposiciones de los capítulos de Solución de Controversias de los Acuerdos Comerciales pueden activarse cuando una Parte ha incumplido las obligaciones del Acuerdo, **o existe una medida vigente o en proyecto de otra Parte que pudiera ser incompatible con el Acuerdo Comercial**. Este es el caso de los aranceles del PND.

Si luego de surtir un proceso de consultas previas, las Partes no logran un acuerdo, se activa el procedimiento de Solución de Controversias y se establece un Panel de expertos encargados de dirimir la reclamación.

De encontrarse que una medida impuesta, en este caso por Colombia, es incompatible con las obligaciones del Acuerdo, se ordena que dichas disposiciones sean modificadas (o eliminadas) para que sean puestas en conformidad con las obligaciones pactadas.

Si la Parte decide no atender las recomendaciones del Organismo de Solución de Controversias, el país afectado puede adoptar "retaliaciones comerciales", en el mismo valor del comercio afectado por la medida en disputa.

Como se observa en la siguiente tabla, en el caso de las confecciones, Colombia realiza importaciones originarias de 25 países con los cuáles tenemos Acuerdos Comerciales, y que se verían afectados en el evento de aplicarse una medida arancelaria como la establecida en el PND para este sector.

En este caso, estos 25 países estarían facultados para solicitar consultas con el Gobierno Colombiano y exigir que los aranceles sean puestos en conformidad con las obligaciones adquiridas por el país. De mantenerse esta



ARAÚJO IBARRA

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

medida, estos 25 países podrían retaliar contra Colombia en los productos que actualmente exportamos hacia dichos destinos. (Ver Tabla 1)

Tabla 1. Importaciones de confecciones originarias de países con Acuerdo comercial y exportaciones totales de Colombia por destino.

COLOMBIA 2018 - MILLONES USD		
	IMPORTS CIF CONFECCIONES	EXPORTS TOTALES
TOTAL MUNDO	672	41,770
Unión Europea	27	4,771
Perú	13	1,165
México	11	1,638
Honduras	10	96
Estados Unidos	7	11,081
Ecuador	2	1,852
Corea del Sur	0.7	627
Brasil	0.7	1,562
Guatemala	0.7	342
El Salvador	0.6	95
Costa Rica	0.3	251
Panamá	0.3	3,597
Paraguay	0.2	26
Venezuela	0.2	354
Argentina	0.2	296
Canadá	0.1	798
Haití	0.1	44
Barbados	0.1	61
Chile	0.05	1,190
Suiza	0.03	330
Uruguay	0.03	54
Bahamas	0.01	387
Bolivia	0.004	143
Noruega	0.002	50
Suriname	0.001	5

Fuente: DIAN y Trademap

En total, se afectarían USD 74,4 millones de comercio, que sería el valor aproximado sobre el que nuestros socios comerciales podrían aplicar retaliaciones.



ARAÚJO IBARRA

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Del análisis de los cinco primeros orígenes de importación se observa que podrían verse afectadas nuestras exportaciones de los siguientes productos.

Unión Europea – Portugal (principal origen de importación de confecciones)

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A PORTUGAL 2018 - USD MILES			
SA		DESCRIPCIÓN	VALOR
'TOTAL	Todos los productos		318,609
'270112	Hulla bituminosa , incl. pulverizada, pero sin aglomerar		302,028
'090111	Café sin tostar ni descafeinar		4,251
'080390	Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)		3,675
'240120	Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo		2,347
'080550	Limonos "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ...		1,450

Fuente: trademap

Perú

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A PERÚ 2018 - USD MILES			
SA		DESCRIPCIÓN	VALOR
'TOTAL	Todos los productos		1,165,001
'270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso		170,896
'170199	Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante ...		58,018
'961900	Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia		40,370
'340220	Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de ...		37,412
'870323	Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, ...		28,164

Fuente: trademap

WWW.ARAUJOIBARRA.COM

Bogotá Calle 98 # 22-64, Of. 910 · Edificio Calle 100 · Tel: 6511511
Barranquilla Calle 77B # 57-141, Of. 211 · Edificio Centro Empresarial Las Américas I · Tel: 5-3690866
Cali Calle 11 # 100-121, Of. 1001 · Edificio Campestre Towers · Tel: 2-3747044 / 2-4837614
Medellín Carrera 43A No. 15 Sur 15 · Of. 802 · Edificio Yarey · Tel: 4-3217131 / 4-3215967

55



ARAÚJO IBARRA

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

México

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A MÉXICO 2018 - USD MILES			
SA		DESCRIPCIÓN	VALOR
'TOTAL	Todos los productos		1,638,112
'270112	Hulla bituminosa , incl. pulverizada, pero sin aglomerar		461,057
'270400	Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta		216,587
'870323	Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, ...		148,620
'271019	Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ...		45,901
'151110	Aceite de palma en bruto		43,544

Fuente: trademap

Honduras

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A HONDURAS 2018 - USD MILES			
SA		DESCRIPCIÓN	VALOR
'TOTAL	Todos los productos		95,676
'841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas		5,319
'210690	Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.		4,611
'300490	Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos ...		3,781
'151190	Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente (exc. aceite ...		3,735
'390210	Polipropileno, en formas primarias		3,305

Fuente: trademap

Estados Unidos

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS 2018 - USD MILES			
SA		DESCRIPCIÓN	VALOR
'TOTAL	Todos los productos		11,080,579
'270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso		4,042,270
'271019	Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ...		1,199,611
'090111	Café sin tostar ni descafeinar		1,008,038
'271012	Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 90% en volumen ...		672,962
'060319	Flores frescas y capullos, cortados, de una, para ramos o adornos (excepto rosas, claveles, ...		665,575

Fuente: trademap

WWW.ARAUJOIBARRA.COM

Bogotá Calle 98 # 22-64, Of. 910 · Edificio Calle 100 · Tel: 6511511
Barranquilla Calle 77B # 57-141, Of. 211 · Edificio Centro Empresarial Las Américas I · Tel: 5-3690866
Cali Calle 11 # 100-121, Of. 1001 · Edificio Campestre Towers · Tel: 2-3747044 / 2-4837614
Medellín Carrera 43A No. 15 Sur 15, Of. 802 · Edificio Xerox · Tel: 4-3217131 / 4- 3215967